

IPDE

ÍNDICE PROVINCIAL de DESEMPEÑO EMPRESARIAL

EDICIÓN
2018


Aniversario
Fundación Libertad

 RED FEDERAL
DE POLÍTICAS PÚBLICAS



ÍNDICE PROVINCIAL de DESEMPEÑO EMPRESARIAL

EDICIÓN
2018

Dirección de Investigación

Ayelén Scapuzzi Serra

Investigadores

Mariano Fortuna

Garret Edwards

Alexandra Maero

Sebastián Abella

Valentina Morales

Javier Bongiovanni

Dan Yemal

ÍNDICE

Introducción

- 06 Prólogo
- 08 Sobre el IPDE
- 10 Notas sobre la metodología

Ranking IPDE

- 16 Distancia a la frontera y Ranking IPDE 2018

Indicadores IPDE

- 22 Apertura de una Empresa
- 34 Obtención de Permisos de Edificación
- 46 Obtención de Electricidad
- 58 Registro de Propiedades
- 72 Aspectos Fiscales

Anexo

- 94 Anexo 1.
Distancia a la Frontera y Ranking IPDE por provincia





INTRODUCCIÓN

Prólogo

Sobre el IPDE

Notas sobre la metodología

PRÓLOGO

La evidencia empírica demuestra que a mayor calidad institucional, mayor es el ingreso por habitante o menor el nivel de pobreza. Así, buenas y sanas instituciones se traducen en el ámbito y contexto propicios para la iniciativa privada y para el desarrollo del espíritu emprendedor. Ello permite formar un círculo virtuoso entre la inversión, la productividad, el empleo y el crecimiento genuino y sostenible.

Por otra parte, la libertad económica, entendida como la menor injerencia del Estado en las decisiones sobre el qué, cómo y para quién producir, también se erige como un factor elemental a la hora de analizar el nivel de vida de los individuos. Precisamente, a partir del análisis de los índices internacionales de libertad económica, hay una fuerte correlación positiva entre ésta y el ingreso por individuo. A más libertad económica, menores son los obstáculos del gobierno en las decisiones de los agentes económicos y mayores son los estímulos para la iniciativa privada. Por ende, mayor es el ingreso de los habitantes de un determinado país.

Las premisas antes mencionadas son el punto de partida del Índice Provincial de Desempeño Empresarial (IPDE). Puntualmente, este índice se propone analizar a través de diversos indicadores, tales como los requisitos para la apertura de una empresa y la presión impositiva, cuáles son las condiciones que ofrecen las jurisdicciones argentinas para el desarrollo empresarial, las asimetrías entre ellas y los obstáculos gubernamentales que existen para que, en función de esto, sea posible delinear políticas públicas que tengan el propósito de promover la inversión y el crecimiento socioeconómico y reducir las brechas interprovinciales.

Naturalmente, la realidad de las provincias no está ajena a lo que acontece a nivel país. La presencia estatal, históricamente y a través de múltiples factores, ha obstaculizado el crecimiento y desarrollo de toda la nación y de sus regiones, derivando ello en un menor bienestar para la sociedad. Si bien cabe destacar que hay algunas señales actuales en particular que presagian un futuro más optimista si se continúa en la senda correcta y se profundiza ese andar. En virtud de esto, tanto a nivel nacional como provincial, debe

trabajarse en políticas públicas que tengan como prioridad lograr un Estado ordenado, eficiente, transparente y moderno, que potencie el espíritu emprendedor. A partir de esto, será factible alcanzar un crecimiento y desarrollo genuino y de largo plazo. El IPDE es una contribución en este sentido, ya que los resultados alcanzados brindarán un diagnóstico de la situación y la posibilidad de establecer propuestas concretas. Solo conociendo dónde estamos parados podremos, entonces, descubrir cómo llegar al destino deseado.

Alejandro Bongiovanni

Director Fundación Libertad | Sede CABA

SOBRE EL IPDE

El Índice Provincial de Desempeño Empresarial 2018 (IPDE) es la primera edición de un informe que mide las regulaciones que favorecen u obstaculizan la actividad empresarial en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El IPDE está compuesto por cinco indicadores cuantitativos: Apertura de una Empresa, Obtención de Permisos de Edificación, Obtención de Electricidad, Registro de Propiedades y Aspectos Fiscales.

El Informe IPDE tiene en cuenta distintas dimensiones del ambiente regulatorio de cada provincia y una ciudad autónoma. El resultado de los indicadores puede utilizarse no solo para comparar las jurisdicciones argentinas entre sí, sino también para analizar el marco regulatorio y la performance económica de cada una de ellas, e identificar las reformas que han funcionado (o no).

La presente investigación parte de la hipótesis de que la actividad económica se beneficia de reglas claras y coherentes. Si dichas reglas son eficientes, transparentes, simples de implementar, accesibles, y tienen costos razonables, son mucho más efectivas para dar forma a los incentivos de los agentes económicos de manera que promuevan el crecimiento económico, el emprendedurismo y la innovación. Promover reformas regulatorias que potencien al sector privado resulta fundamental para que las empresas creen más empleo, se atraigan inversiones y se creen más oportunidades para que las economías subnacionales prosperen.

La metodología del IPDE, elaborada específicamente para atender las particularidades de las jurisdicciones provinciales argentinas, encuentra su inspiración en el Informe Doing Business del Banco Mundial. Sin embargo, la metodología utilizada ha sido modificada y adaptada para que pueda dar cuenta de las sutiles diferencias que pudieren existir entre las distintas provincias de Argentina.

La mayoría de los indicadores se basan en un estudio de caso con supuestos que permiten comparar entre provincias. El estudio de caso se desarrolla en la ciudad más importante para hacer negocios de cada jurisdicción, definida como la ciudad con mayor población.

La Distancia a La Frontera (DLF) mide la distancia de cada economía con la frontera, que queda definida por el mejor desempeño observado para cada indicador para esta primera edición IPDE 2018. La distancia a la frontera de una economía se encuentra en una escala de 0 a 100, donde 100 representa la frontera y 0 representa la peor performance. El ranking IPDE va de 1 a 24, y se determina jerarquizando los puntajes de distancia a la frontera obtenidos, redondeado a dos decimales.

Este informe fue idea original de Fundación Libertad y la Red Federal de Políticas Públicas, pero ha recibido apoyo y comentarios de oficiales de gobierno de distintos niveles, académicos, profesionales y empresarios.

En el sitio web del presente informe¹ se puede acceder a los datos recolectados, detallados para cada indicador y jurisdicción, actualizados al 31 de enero de 2018.

¹ Sitio web Informe IPDE 2018: www.ipde.com.ar

NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA

El Informe IPDE mide las regulaciones que afectan a pequeñas y medianas empresas en la ciudad más poblada de cada jurisdicción, definida como la ciudad más importante para hacer negocios. A través de estudios de caso, el informe detalla indicadores cuantitativos sobre las regulaciones que aplican a las empresas en distintas etapas de su ciclo de vida.

Qué mide el IPDE

Los primeros cuatro indicadores se inspiran en el Informe Doing Business que realiza el Banco Mundial, adaptados para que puedan medir las particularidades de las jurisdicciones argentinas. El indicador restante (Aspectos Fiscales) está basado en un informe que publica cada año Fundación Libertad titulado “Índice de Desempeño Provincial” (IDP), que analiza variables fiscales provinciales como el tamaño del sector público y su financiamiento.

Indicador	Qué mide
1. Apertura de una Empresa	Procedimientos, tiempo y costos requeridos para abrir una SRL.
2. Obtención de Permisos de Edificación	Procedimientos, tiempo y costos para cumplir con todas las formalidades requeridas para construir un depósito comercial y habilitarlo, y la calidad de la información disponible.
3. Obtención de Electricidad	Procedimientos, tiempo y costos para recibir la conexión a la electricidad, y la calidad de la información disponible.
4. Registro de Propiedades	Procedimientos, tiempo y costos para transferir una propiedad.
5. Aspectos Fiscales	Tamaño del sector público y autonomía fiscal provincial.

Recolección de datos

Los datos para realizar el Informe IPDE se basan principalmente en la lectura de las regulaciones, normativas y leyes, así como también en los requisitos administrativos de cada jurisdicción relevada. Además, se recolecta información a través de encuestas a expertos sobre cada indicador (tanto del sector privado como oficiales de gobierno), varias rondas de comunicaciones con oficinas administrativas gubernamentales, entrevistas, llamados telefónicos, correos electrónicos y visitas. Las cuatro principales fuentes del Informe IPDE son: leyes y regulaciones relevantes, respuestas de encuestas específicas sobre cada tema, oficiales de gobierno y miembros de la Red Federal de Políticas Públicas.

La Distancia a la Frontera y el Ranking IPDE

El Informe IPDE presenta un ranking provincial por cada indicador, así como también un ranking general, para dos medidas agregadas: distancia a la frontera y el ranking IPDE. Este último compara economías entre sí, mientras que la distancia a la frontera muestra la posición en la que se encuentra cada economía en relación a la mejor performance en materia regulatoria para cada indicador.

Calcular la distancia a la frontera para cada economía implica dos pasos. En el primero, los componentes individuales de los indicadores se normalizan en una unidad común donde cada uno de los indicadores componentes "y" se vuelve a escalar utilizando una transformación lineal

$$\frac{(\text{peor performance} - y)}{(\text{peor performance} - \text{frontera})}$$

La frontera representa el mejor desempeño para cada componente, para cada indicador. Para los componentes del indicador Aspectos Fiscales, la frontera se establece para el mejor porcentaje alcanzado.

El segundo paso para calcular la distancia a la frontera comprende agregar los puntajes obtenidos para cada componente individual para cada economía, a través de un promedio simple, primero para cada indicador y luego para todos: apertura de una empresa, obtención de permisos de edificación, obtención de

electricidad, registro de propiedades y aspectos fiscales. El método de agregación es simple: todos los indicadores pesan igual, y, dentro de cada indicador, todos los componentes pesan lo mismo.

La distancia a la frontera de cada economía se encuentra entre 0 a 100, en donde 0 representa la peor performance y 100 es la frontera.

Cada indicador mide un aspecto diferente del entorno regulatorio relacionado a la apertura de una empresa. La distancia a la frontera y las clasificaciones asociadas de una economía pueden variar, a veces significativamente, entre indicadores. Esta variación refleja la diferencia en el nivel de prioridad que las autoridades de gobierno asignan a las distintas áreas de la regulación, y en la capacidad de diferentes agencias gubernamentales para producir resultados tangibles en su área de responsabilidad.

El Ranking IPDE varía de 1 a 24. La clasificación de las economías se determina ordenando la distancia agregada a la frontera, redondeada a dos decimales. Una clasificación elevada indica un entorno regulatorio favorable para la apertura y operación de una empresa local. La información fue recolectada hasta el 31 de enero de 2018. La clasificación está determinada con fecha abril 2018.

Limitaciones de la metodología

- El Informe IPDE no tiene en cuenta aspectos macroeconómicos o financieros, corrupción o sobornos, tamaño de mercados o rentabilidad de las empresas, inseguridad, infraestructura, entre otros tantos factores que en la práctica se tienen en cuenta al decidir si hacer (o no) negocios en un determinado lugar.
- Al utilizar un estudio de caso estandarizado para todas las provincias argentinas, no se logran captar las particularidades de cada ciudad relevada. Sin embargo, la simplificación se vuelve necesaria para poder comparar entre economías subnacionales.
- Solo se tiene en cuenta la ciudad más importante para hacer negocios en cada provincia, definida como la ciudad con más población, lo cual puede no ser representativo de lo que sucede en el interior de cada jurisdicción.
- Solo se recolectaron datos oficiales o prácticas formales, dada la imposibilidad de medir el sector informal o los costos ocultos de llevar a cabo los procedimientos.

- Debe tenerse en cuenta que cuando la regulación es particularmente gravosa, los niveles de informalidad tienden a ser mayores.
- El informe se basa en las leyes y normativas vigentes, dado que es esto lo que los hacedores de políticas públicas pueden reformar.
- Los indicadores se elaboran bajo la conjetura de que los empresarios conocen todas las regulaciones vigentes y que además las cumplen. En la práctica, es probable que los trámites necesarios sean desconocidos, o que no se sepa cómo realizarlos, lo que podría implicar una pérdida de tiempo considerable tanto en la averiguación como en la ejecución.
- En ocasiones la aparente simplicidad de trámites no implica realmente un buen clima de negocios ni facilidad para la consecución de los objetivos perseguidos. Pocos procedimientos pueden esconder pasos ocultos o no bien detallados.





RANKING IPDE

Distancia a la frontera y Ranking IPDE 2018

RANKING IPDE 2018

Provincia	Ciudad	Distancia a la Frontera	Ranking IPDE 2018
CABA	CABA	68,32	1
San Luis	San Luis	63,73	2
Chubut	Comodoro Rivadavia	59,43	3
Salta	Salta	57,18	4
Tierra del Fuego	Río Grande	56,15	5
Entre Ríos	Paraná	54,61	6
Córdoba	Córdoba	54,51	7
Chaco	Resistencia	54,18	8
Santa Fe	Rosario	51,93	9
Jujuy	SS de Jujuy	51,79	10
Tucumán	SM de Tucumán	51,27	11
Buenos Aires	La Plata	51,11	12
Mendoza	Mendoza	51,1	13
Santiago del Estero	Santiago del Estero	51,09	14
Misiones	Posadas	51,03	15
San Juan	San Juan	49,49	16
Neuquén	Neuquén	47,63	17
Río Negro	SC de Bariloche	45,83	18
Catamarca	SF del V de Catamarca	45,43	19
La Pampa	Santa Rosa	44,14	20
La Rioja	La Rioja	44,07	21
Formosa	Formosa	40,11	22
Corrientes	Corrientes	39,49	23
Santa Cruz	Río Gallegos	36,84	24

Fuente: base de datos de IPDE.

Nota: la clasificación se basa en el ordenamiento de los puntajes obtenidos para la media de la distancia a la frontera calculada para los cinco indicadores, para cada jurisdicción. La distancia a la frontera está normalizada dentro de un rango de 0 a 100, 100 representando la frontera de las mejores prácticas. Los datos para realizar el cálculo han sido actualizados al 31 de enero de 2018.

0

Distancia a la Frontera

100



Notas sobre el Ranking IPDE 2018

El Ranking IPDE 2018 se conforma luego de ordenar, de mayor a menor, los puntajes obtenidos al calcular la distancia a la frontera para las distintas jurisdicciones argentinas. Para dicho cálculo se agregan los puntajes obtenidos para cada componente individual para cada economía a través de un promedio simple, primero para cada indicador, y luego para todos: apertura de una empresa, obtención de permisos de edificación, obtención de electricidad, registro de propiedades y aspectos fiscales. Una clasificación elevada en el Ranking IPDE indica un entorno regulatorio favorable para la apertura y operación de una empresa local.

El presente informe proporciona datos objetivos para analizar, comprender y mejorar las normativas que regulan la actividad empresarial, clasifica cada localidad en representación de su provincia y recomienda reformas para mejorar los resultados de cada uno de los indicadores. Si bien no incluye un análisis exhaustivo de todos los aspectos a tener en cuenta al momento de abrir y operar una empresa, sí puede tomarse como un punto de partida para la discusión sobre reformas regulatorias en el país.

Según una investigación reciente comisionada por Atlas Network, un incremento del cinco por ciento en el ranking Doing Business del Banco Mundial representa una reducción de un punto porcentual de la pobreza². La publicación, titulada "Business Regulations and Poverty", encuentra apoyo empírico para la asociación entre el recuento de la pobreza y la regulación favorable a las empresas. Demuestra que soluciones locales destinadas a transformar el entorno institucional en favor del crecimiento del mercado, principalmente a través de la garantía de los derechos económicos para los pobres, representa la mejor oportunidad para reducir la pobreza en todo el mundo. Esto no debiera sorprender: la burocracia es una de las principales barreras para el florecimiento de los negocios.

Según el Informe de Competitividad Global 2017-2018 realizado por el Foro Económico Mundial, la burocracia gubernamental ineficiente se encuentra entre los factores más problemáticos para hacer negocios en Argentina, luego de la inflación, la elevada presión fiscal, la inestabilidad política, el acceso al financiamiento y las normas restrictivas del trabajo³. En el reporte Doing Business de 2018 -que toma datos hasta junio de

² Atlas Network (2017). Business Regulation and Poverty. Recuperado de: https://www.atlasnetwork.org/assets/uploads/misc/Business_Regulation_and_Poverty_Sept_9.pdf

³ Perfil de Argentina en el Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial: <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=ARG>

2017-, la Argentina se encuentra en el puesto número 117 entre 190 economías⁴, lo que indica que hay mucho espacio para mejorar.

Iniciativas implementadas en los últimos años, como la Ley Nacional de Emprendedores⁵ y la Ley Pyme 27.264⁶, buscan solucionar la ineficiencia burocrática simplificando el proceso para abrir un negocio en el país. Otros proyectos que apuntan a hacer más eficiente al Estado incluyen un Ranking de Municipios a cargo de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación⁷, una competencia para que los municipios comparen sus gestiones y transparenten sus datos; la creación de Argentina.gob.ar, una plataforma digital para agilizar y centralizar trámites online a cargo del Ministerio de Modernización de la Nación; y el lanzamiento del Sistema Nacional de Turnos, una ventanilla única que permite sacar turnos online en 11 organismos públicos⁸. Además, en noviembre de 2017 los Ministerios de Producción y Modernización de la Nación presentaron el Plan de Simplificación del Estado⁹, que tiene por fin la transparencia, la agilidad y la federalización de los trámites, y se basa en mejores prácticas internacionales de la relación del Estado con los ciudadanos. Se espera que este programa genere ahorros equivalentes a 1 punto del PBI en desburocratización, dando más productividad a toda la economía.

Todavía queda un largo camino por delante para alcanzar la desburocratización del Estado, con el fin de potenciar el espíritu emprendedor en todas las regiones del país. Los próximos capítulos detallan los resultados del estudio de cada indicador, para cada jurisdicción argentina, al mismo tiempo que propone reformas para mejorar cada área.

⁴ Perfil de Argentina en el Doing Business 2018 del Banco Mundial: <http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreconomies/argentina>

⁵ Más información sobre la Ley Nacional de Emprendedores: <https://www.produccion.gob.ar/2017/03/30/ley-de-emprendedores-creacion-de-empresas-en-un-dia-y-mas-financiamiento-para-ideas-argentinas-61003>

⁶ Más información sobre la Ley de Pymes 27264: <https://www.produccion.gob.ar/pymes>

⁷ Más información sobre el Ranking de Municipios: <https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-asuntos-municipales/ranking-de-municipios>

⁸ Sitio web del Sistema Nacional de Turnos: <https://www.argentina.gob.ar/turnos>

⁹ Más información sobre el Plan de Simplificación del Estado: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-plan-de-simplificacion-del-estado>



INDICADORES IPDE

Apertura de una Empresa



Obtención de Permisos de Edificación



Obtención de Electricidad



Registro de Propiedades



Aspectos Fiscales





APERTURA DE UNA EMPRESA

El indicador Apertura de una Empresa registra todos los procedimientos que se requieren oficialmente, o que se realizan en la práctica, para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo asociado. Estos procedimientos incluyen todos aquellos trámites que deben realizar los empresarios, tanto para poder obtener todas las licencias y permisos necesarios, como para realizar cualquier notificación, comprobación o inscripción ante las autoridades correspondientes, que se exijan respecto de la empresa y sus empleados. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.

Descripción del indicador

Previamente a analizar los resultados obtenidos para el indicador Apertura de una Empresa, se destaca que, en la mayoría de los supuestos, la metodología para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es similar en todos los rincones del país. Ello producto del hecho de que Argentina es un país federal que tiene una legislación de fondo compartida para todo su territorio (como lo es el Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, o como lo es la actual Ley General de Sociedades, ex Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nacional N° 19.550).

Es por lo anteriormente mencionado que las diferencias en el ranking se deben, en un primer punto, a la distancia generada entre lo que la normativa prescribe, lo que sería el óptimo de funcionamiento según criterios y estándares internacionales, y lo que en la práctica sucede. En múltiples ocasiones, tal cual lo han destacado profesionales y expertos consultados a los fines de coleccionar la información utilizada y procesada para la obtención de los resultados aquí presentados, lo que la normativa provincial marca como plazo temporal no siempre es respetado luego en los hechos y corroborado de manera fáctica en la realidad.

Se puede observar que en ocasiones hay provincias con una mayor cantidad de pasos, dado que se han encargado de definirlos y separarlos a fines didácticos y funcionales, logrando así mejores tiempos de respuesta. En otras ocasiones, la eliminación de un simple paso, y la verdadera digitalización y/o posibilidad de realizarlos de manera simultánea y/o a distancia, se convierte en el elemento facilitador de los trámites.

Qué mide el indicador

■ Procedimientos para abrir una empresa (número)

- Cualquier interacción de los fundadores de la sociedad con terceras partes externas (por ejemplo, organismos del gobierno, abogados, auditores y/o notarios).
- Las interacciones entre los fundadores o ejecutivos de la compañía y los empleados no se consideran procedimientos.
- Se registran tanto los procedimientos previos como los posteriores que se requieren para abrir una empresa y operar legalmente un negocio.

■ Tiempo para llevar a cabo los procedimientos (días calendario)

- El plazo para cada procedimiento comienza con la primera presentación de la solicitud y termina una vez que la empresa ha recibido el documento final, como el certificado de registro de la empresa.
- Se supone que el empresario no ha tenido contacto previo con ninguno de los funcionarios.
- El tiempo mínimo para un procedimiento es de 1 día. Los procedimientos que pueden completarse completamente en línea se cuentan como medio día.

■ Costo requerido para completar los procedimientos (% del PBI per cápita a precios corrientes)

- Incluyen sólo cargos oficiales e impuestos.
- Se excluyen los sobornos.
- Los honorarios por servicios profesionales (como los de notarios, abogados o contadores) se incluyen sólo si la empresa está obligada por ley a utilizar dichos servicios o si el uso de servicios profesionales es solicitado por la mayoría de los empresarios.

Supuestos del estudio de caso

Para poder comparar entre las economías provinciales se ha definido un estudio de caso con los supuestos a continuación.

■ La empresa

- Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
- Tiene 5 propietarios (accionistas) y es 100% de propiedad nacional.
- Está ubicada en la ciudad más poblada de cada provincia.
- El capital inicial es equivalente a 10 veces el ingreso per cápita de Argentina y las ventas anuales son al menos 100 veces el ingreso per cápita del país.
- Tiene entre 10–50 empleados al mes de comenzar las operaciones, todos argentinos.
- Acta de Constitución de la empresa tiene 10 páginas.

■ Actividades

- El negocio realiza actividades industriales o comerciales generales, tales como la producción o venta de productos o servicios al público.
- No califica para incentivos de inversión o ningún beneficio especial.
- La empresa no realiza actividades de comercio exterior y no maneja productos sujetos a un régimen fiscal especial, por ejemplo, bebidas alcohólicas o tabaco. No utiliza procesos de producción altamente contaminantes.

■ Activos y oficinas

- La empresa alquila una planta comercial y oficinas, y no es propietaria de bienes inmuebles.
- El valor total del alquiler anual para el espacio de oficina es equivalente al ingreso per cápita de Argentina.

Sumado a lo anterior, y siguiendo lineamientos internacionales respecto a qué resulta necesario para poder abrir una empresa y que la misma se encuentre operativa, surge un contacto ineludible con organismos de carácter nacional (como la Administración Nacional de la Seguridad Social, o la Administración Federal de Ingresos Públicos). Estas instituciones han ido encontrando, más allá de alguna diferencia localizada, un funcionamiento con tiempos de respuesta unificados. Las diferencias, como se mencionaba previamente, se presentan al momento de lidiar con los organismos públicos que pertenecen a cada ciudad y provincia en particular.

Tal como se describe aquí, y como se podrá observar en el cuadro de resultados que se incluye más adelante, las diferencias más notables tienen que ver con los tiempos de ejecución. Los organismos de competencia nacional son un denominador común en todos los distritos y, a su vez, los más ágiles en todo el encadenamiento de agencias públicas. AFIP, por su parte, no ofrece posibilidad de realizar el trámite pertinente vía plataforma digital, pero se resuelve en sólo un día; mientras que la diligencia que debe hacerse ante ANSES puede hacerse vía internet, e insume menos de un día. En contraste, las agencias de la órbita provincial, a pesar de que algunas cuentan con plataformas en línea (que supondría una agilización del proceso) son las que frenan en mayor medida el procedimiento: cuando se llega a instancias de los registros públicos de comercio o a las inspecciones generales de personas jurídicas, los plazos se estiran visiblemente.

Análisis de los resultados

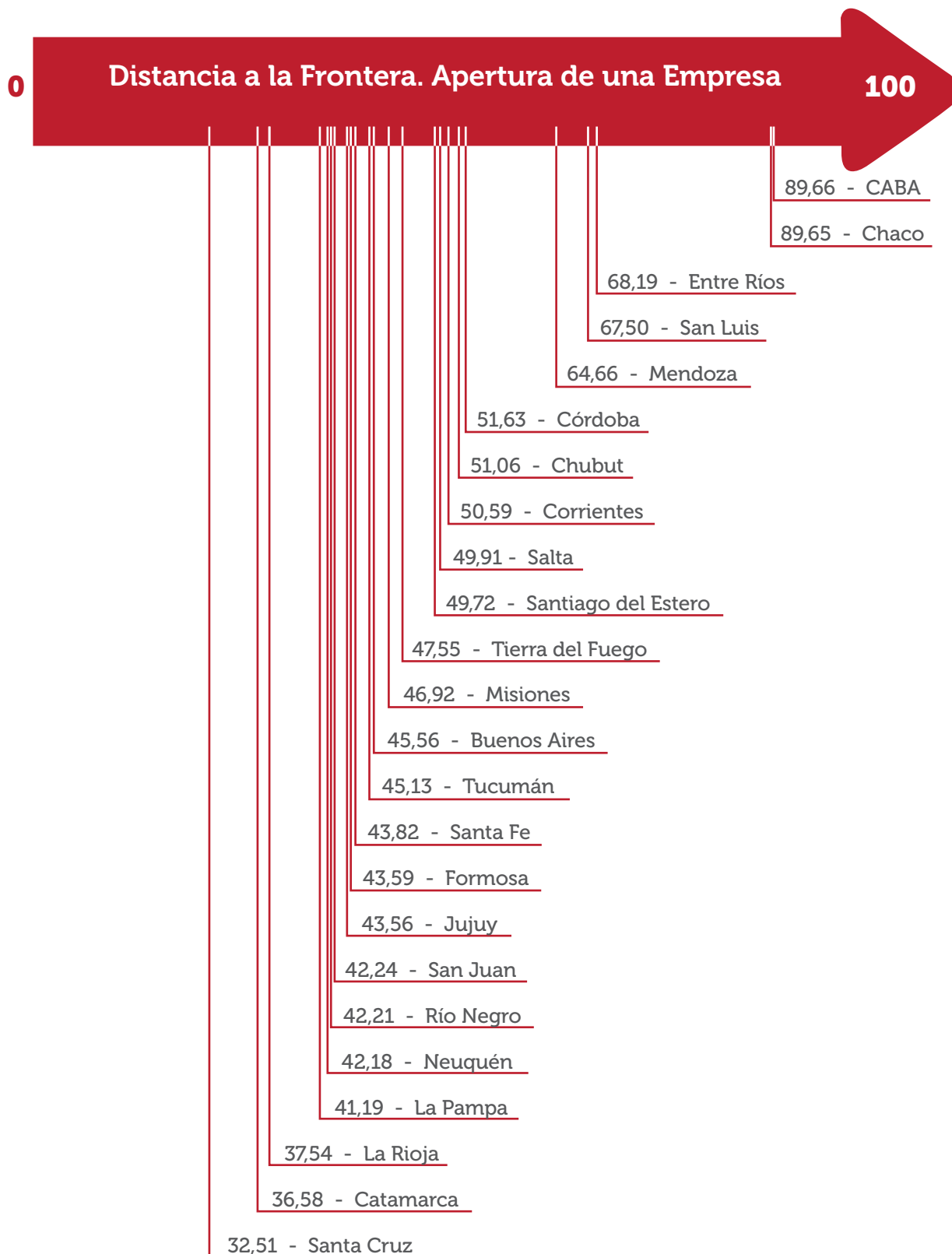
Tal como se describió al comienzo del capítulo, el resultado final y la posición de cada ciudad en el ranking surge del entrecruzamiento de los datos relevados para los componentes de tiempo, costo y cantidad de procedimientos, los cuales ponderan igual para calcular la distancia a la frontera. El ranking Apertura de una empresa clasifica a las provincias desde la mejor performance (posición 1) a la peor (posición 24). Por su parte, la distancia a la frontera mide cuán cerca se encuentra una determinada provincia de obtener el mejor desempeño para ese indicador, siendo 100 el mejor puntaje, y 0 el más bajo.

Tabla 1. Indicador Apertura de una Empresa

Indicador Apertura de una Empresa						
Provincia	Ciudad	Ranking	Distancia a la Frontera	Procedimientos (número)	Tiempos (días calendario)	Costo (% del PBI per cápita a precios corrientes)
CABA	CABA	1	89,66	12	6	7,10
Chaco	Resistencia	2	89,65	13	10,5	4,80
Entre Ríos	Paraná	3	68,19	13	21	11,05
San Luis	San Luis	4	67,5	13	27,5	10,22
Mendoza	Mendoza	5	64,66	11	50	10,64
Córdoba	Córdoba	6	51,63	13	53	11,88
Chubut	Comodoro Rivadavia	7	51,06	19	24	7,62
Corrientes	Corrientes	8	50,59	13	46,5	13,35
Salta	Salta	9	49,91	13	62,5	10,94
Santiago del Estero	Santiago del Estero	10	49,72	13	60,5	11,35
Tierra del Fuego	Río Grande	11	47,55	13	49,5	13,99
Misiones	Posadas	12	46,92	13	73,5	10,22
Buenos Aires	La Plata	13	45,56	13	47,5	15,06
Tucumán	SM de Tucumán	14	45,13	13	35,5	17,22
Santa Fe	Rosario	15	43,82	13	48	15,62
Formosa	Formosa	16	43,59	13	65,5	12,79
Jujuy	SS de Jujuy	17	43,56	13	60,5	13,64
San Juan	San Juan	18	42,24	13	70,5	12,46
Río Negro	SC de Bariloche	19	42,21	13	66,5	13,14
Neuquén	Neuquén	20	42,18	13	70,5	12,49
La Pampa	Santa Rosa	21	41,19	13	47,5	16,69
La Rioja	La Rioja	22	37,54	13	68,5	14,55
Catamarca	SF del V de Catamarca	23	36,58	13	61,5	16,07
Santa Cruz	Río Gallegos	24	32,51	13	80,5	14,42

Fuente: base de datos de IPDE.

Nota: la clasificación se basa en la media de la distancia a la frontera de los subindicadores número de procedimientos, tiempo y costo asociados a la apertura de una empresa. La distancia a la frontera está normalizada dentro de un rango de 0 a 100, 100 representando la frontera de las mejores prácticas. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.



La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking. Si bien no resulta la menos onerosa del listado, sí es la que insume menos tiempos para la constitución de una SRL. Abrir una empresa en CABA implica 12 pasos que se realizan en 6 días, y cuesta el 7,10% en relación al PBI per cápita medido en precios corrientes. La siguen Resistencia (Chaco), Paraná (Entre Ríos) y San Luis (San Luis), en ese orden, que con costos y tiempos de espera razonables tampoco se quedan demasiado rezagadas. Es de destacar el caso de Resistencia, que se suma al listado de localidades que avanzan hacia la digitalización de sus trámites y hacia la desburocratización. El distrito nortero permite la realización virtual de 7 de los 13 pasos, de los cuales 5 se hacen en menos de un día.

El pelotón de ciudades del medio de la tabla, de Córdoba (6º) a Santa Rosa (21º) no presenta grandes dispersiones, con variaciones de distancia a la frontera que van alejándose entre sí por no más de 10 puntos. Quizá lo primordial a mencionar sea que las mismas comparten criterios y metodologías, a grandes rasgos, y en ellas no prima la posibilidad de realizar trámites a distancia que acorten razonablemente los plazos de espera y reduzcan la tradicional burocracia. En este grupo también se destaca el caso de San Miguel de Tucumán, la localidad más cara para hacer negocios en la Argentina. Allí, abrir una empresa tiene un costo de 17,22%. Río Grande (11º), por su parte, es un reflejo del promedio nacional, en tanto comparte la cantidad de pasos de prácticamente todos los distritos (13), en un tiempo de 49 días, y un costo de 13,99%.

Las tres ciudades que cierran el ranking son aquellas con la peor combinación de los tres aspectos relevados por este informe: cantidad de procedimientos, costos y tiempo. En el puesto 22 se encuentra La Rioja, donde se precisan 13 trámites, que insumen 68 días y cuestan un 14,55% del PBI per cápita; seguida, en el lugar 23, por San Fernando del Valle de Catamarca, localidad en la que hay que cumplir 13 pasos, en 61 días y que cuestan el 16,07%. El caso de la última ciudad del ranking es paradigmático. Río Gallegos (Santa Cruz) ocupa el último puesto, y no resulta, desafortunadamente, una novedad, encontrándose en un virtual paro absoluto de sus organismos públicos. En esta localidad, abrir una empresa insume

13 pasos, con una duración de 80 días, y un costo de 14,42% del PBI per cápita. Si se la compara con CABA -el distrito que lidera la tabla- en Río Gallegos se precisa un procedimiento más, el plazo es 74 días más largo, y el costo es el doble.

Abrir una empresa en Argentina

Al visualizarse las particularidades de cada localidad y provincia se aprecian los beneficios obtenidos merced a la normativa nacional de apoyo a los inversores y al emprendedorismo (que requiere adhesión provincial en cada caso, Ley Nacional N° 27.349, Ley Nacional de Emprendedores). Gracias a esta normativa, con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han reducido notablemente los tiempos de constitución de sociedades, reduciéndose así también los costos. No todas las provincias han adherido aún a la legislación mentada. Y, más todavía, no todas las provincias encuentran en sus sitios web oficiales debida información y respuesta a las consultas e inquietudes de quienes desean llevar adelante negocios en ellas. A más de ello, la confusión entre la digitalización y tecnologización bien entendidas de los trámites, y la simple participación de ordenadores en los trámites, parece no encontrarse debidamente explicitada. Muchas provincias confunden digitalizar los trámites con escanear los formularios, requiriéndose igualmente la participación activa, en persona y física, de quienes se encuentran realizando los procedimientos.

De acuerdo a números presentados por el Ministro de Producción de Nación¹⁰, Francisco Cabrera, el ahorro generado para las firmas por la digitalización alcanza a los \$ 444 millones en 2017. Siguiendo cálculos oficiales, hay 550 toneladas de papel que se buscará ir eliminando progresivamente en virtud de las modificaciones legislativas propuestas desde fines de 2015 en adelante. En orden a acelerar las inversiones se debe mejorar la eficiencia. Principio ineludible para un buen clima de negocios, con la posibilidad de generar un ahorro para el sector privado de hasta el 1% del PBI, que representaría unos \$ 93.000 millones.

¹⁰ El Cronista: "Avanzan con simplificación de trámites para empresas", 9 de agosto, 2017. Última vez consultado en fecha 10/03/18. Disponible en línea en link de enlace: <https://www.cronista.com/economiapolitica/Avanzan-con-simplificacion-de-tramites-para-empresas-20170809-0049.html>.

El propio Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, fue tajante en sus declaraciones a medios periodísticos: "Pareciera que es más fácil formar un partido político que una SRL"¹¹. No le es invisible la problemática al gobernador, que denota que algo que suele ser complicado, como la conformación legal de un partido político, parece ser más simple que constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Detalles que denotan las diferencias propias de Santa Fe con el resto de las provincias, encontrándose en el importante pelotón de distritos que aún no ha adherido a la Ley Nacional de Emprendedores.

Durante gran parte de 2017, la novedad de la digitalización y del nuevo tipo societario de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) solo se encontraba disponible para Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su famosa Inspección General de Justicia (IGJ). Situación que se fue modificando con la aparición de Chaco, por caso, también pionera en estas lides. Se calcula que el sistema digital es al menos cuatro veces más barato que realizar las gestiones de manera presencial, según fuentes oficiales. Incluso el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se sumó a la palestra con sus dichos públicos: "La historia demuestra que cada traba, cada demora se ha transformado en un quiosco que, en base a la extorsión, resta energía (...) no hay lugar para comportamientos mafiosos"¹².

Previo a la entrada en vigencia de la nueva normativa, la creación de una sociedad en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) requería de al menos 55 días, de acuerdo a relevamientos oficiales y extraoficiales. En algunos distritos, incluso, las estadísticas relevadas demuestran que podía llegar a demorarse hasta 2 años la constitución de una sociedad. En base a la Ley Nacional de Emprendedores, fomentando todo tipo de iniciativas, no solamente las tecnológicas, se promovió la

¹¹ Rosario 3: "Pareciera que es más fácil formar un partido político que una SRL", 10 de agosto, 2017. Última vez consultado en fecha 10/03/18. Disponible en línea en link de enlace: https://www.rosario3.com/noticias/Pareciera-que-es-mas-facil-formar-un-partido-politico-que-una-SRL-20170810-0049.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter.

¹² Télam: "Macri: cada traba, cada demora, se transformó en un quiosco que, en base a la extorsión, resta energía", 28 de septiembre, 2017. Última vez consultado en fecha 10/03/18. Disponible en línea en link de enlace: <http://www.telam.com.ar/multimedia/video/26058-macri-cada-traba-cada-demora-se-transformo-en-un-quioco-que-en-base-a-la-extorsion- resta-energia>.

constitución de sociedades, a la par que la apertura de una cuenta bancaria, digitalización de firma y libros contables, junto a la obtención de CUIT y Clave Fiscal de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Los resultados demuestran claramente las intenciones del Gobierno Nacional de empujar hacia la desburocratización y digitalización de todo tipo de trámites, siguiendo lineamientos y estándares internacionales, en pos de la modernización del Estado. Tanto es así que incluso el Gobierno de CABA ha creado una herramienta llamada “Mapa de Oportunidades Comerciales”, una plataforma de big data que da la posibilidad al usuario de acceder a información comercial sobre cada barrio de la ciudad, con reportes detallados que permiten un mejor análisis a la hora iniciar un negocio, incluyendo un índice de supervivencia.

Según datos de IGJ¹³, en el último trimestre del año 2017 se crearon 1372 sociedades de responsabilidad limitada, un 46% más que en el mismo período del año anterior. Por diversos motivos, la SRL se ha erigido como la figura societaria más elegida por los emprendedores, al tratarse de un tipo societario que limita la responsabilidad de sus integrantes al capital social debidamente integrado, no poniendo en juego el patrimonio individual de cada socio. Asimismo, con procedimientos acelerados, se favorecerá su florecimiento en todo el país, y las facilidades de creación permitirán que cualquier emprendedor pueda salir a pista comercial rápidamente.

¿Qué reformar?

Resulta claro que si las provincias que no han rendido bien en el ranking desean mejorar su posición relativa y absoluta, han de hacer suyas las recomendaciones dadas por organismos nacionales e internacionales, comenzando por la adhesión y la adecuación de la administración pública provincial de cada distrito a la normativa a nivel federal que esboza los lineamientos generales de desburocratización y modernización del Estado. Si

¹³ La Nación: “Desde que se agilizó el trámite, se inscriben casi 24 emprendimientos nuevos al día”, 15 de enero, 2018. Última vez consultado en fecha 10/03/18. Disponible en línea en link de enlace: <https://www.lanacion.com.ar/2100172-des-de-que-se-agilizo-al-tramite-se-inscriben-casi-24-emprendimientos-nuevos-al-dia>.

bien no resulta aún perfecta, sino más bien perfectible, la Ley Nacional de Emprendedores ha sido un puntapié de importancia a los fines de volver al Estado más eficiente y veloz en lo que refiere a la constitución de sociedades.

La posibilidad de que en el futuro se realicen trámites sin ningún tipo de asesoramiento profesional, alcanzando los conocimientos de quienes son legos en materia jurídica y/o contable, será la demostración cabal de que se ha avanzado lo suficiente como para facilitarle la vida al ciudadano de a pie en lo que a burocracia se refiere. Trámites sencillos, rápidos, eficientes, a bajo costo, con rápida respuesta, debidamente explicados, y sin necesidad de presencia física son la receta adecuada para la solución de las problemáticas que se materializan en los resultados expuestos.

En tal sentido, se señalan los siguientes puntos a los fines de conceptualizar algunas de las principales reformas que actualmente hacen falta en este sector en particular.

■ **Desfederalización y mayor autonomía a las provincias**

Probablemente una reforma de largo aliento, y enfocada en el largo plazo. Este ítem se destaca por el hecho de que, al poseer Argentina una normativa de fondo que regula de manera unificada gran parte del ordenamiento jurídico de nuestro país, las provincias argentinas (en sus competencias reservadas y delegadas) no ha quedado con demasiado campo de acción en determinados segmentos en particular en lo que hace a la apertura de una empresa. Sería interesante un ejercicio de mayor autonomía a las provincias, y de la correspondiente desfederalización de determinados temas en específico.

Imaginemos, por caso, la chance de que cada jurisdicción argentina pueda proponer modificaciones a la manera de llevar adelante los procesos y procedimientos societarios en orden a volver más atractivos sus territorios para la creación de empresas de distinto tipo. Será una discusión y un debate de cara a las relaciones entre Nación y provincias para los años venideros.

■ **Facilitar el acceso a la información y transparentar tiempos y costos**

Una problemática que se encuentra compartida por prácticamente todas las jurisdicciones relevadas en este estudio. La falta de información clara y precisa, libremente accesible y de fácil comprensión es una situación recurrente en la mayoría absoluta de las provincias argentinas. Ello dificulta conocer a ciencia cierta costos y tiempos de los trámites en cuestión, e incluso, en ocasiones, cuáles son los pasos propiamente dichos a seguir para poder abrir una empresa.

Si bien hay una serie de trámites que no pueden hacerse sin la asistencia profesional (de escribanos, abogados y/o contadores), en la práctica la dependencia de este tipo de asesoramiento y consultoría se torna ineludible a los fines de poder cumplimentar con los procedimientos de manera íntegra y absoluta. Es, las más de las veces, tan oscuro y falto de información pública lo que debe hacerse para llevar adelante la apertura de una empresa, que contar con un profesional independiente contratado resulta inexorable.

Información clara y precisa, accesible de una manera simple y eficaz, que transparente costos y tiempos, será una valiosa herramienta a los fines de generar confianza en la ciudadanía, y coadyuvará a incrementos sustanciales en los posicionamientos del indicador de referencia. Yendo un paso más, la posibilidad de que estos trámites pueden hacerse totalmente sin depender de un profesional para su acompañamiento y seguimiento será la muestra clara de que el Estado ha desburocratizado y modernizado completamente el área.

■ **Fomentar el uso de plataformas digitales**

Como se ha mencionado anteriormente, las provincias que mejores resultados han mostrado en este indicador son aquellas que han hecho de las plataformas digitales, de la desintermediación, de la vera digitalización de sus trámites, y de la posibilidad de realizar trámites a distancia sin el apersonamiento físico. La tecnología del siglo XXI permite realizar cosas que no hace demasiados años eran impensables e inimaginables. El ahorro de tiempos y de costos, volviendo eficaces y eficientes los sitios webs oficiales de los

distintos organismos públicos vinculados con los procedimientos para la apertura de una empresa, será de un valor incalculable (si bien ya se han hecho algunas estimaciones previamente).

En este sentido, el Gobierno Nacional viene impulsando estos principios, y lo mismo ya han hecho algunas provincias argentinas. Es cierto que existe la posibilidad de que haya un período de transición en que convivan lo análogo y lo digital, en tanto y cuanto los distintos actores vayan acostumbrándose al nuevo funcionamiento. Con el decurso propio del tiempo, estas nuevas tecnologías -ya adaptadas, y dejando de ser "nuevas"- serán las herramientas que permitan ocupar menos tiempos en trámites, y destinar ese tiempo ahorrado en crear y emprender, para fomentar el crecimiento genuino de la Argentina.



OBTENCIÓN DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN

El indicador Obtención de Permisos de Edificación registra todos los procedimientos requeridos para que una empresa del sector de la construcción pueda construir un depósito, así como el tiempo y costo asociado. Estos procedimientos incluyen, pero no se limitan, a la recopilación y presentación ante las autoridades de todos los documentos específicos del proyecto de obra (por ejemplo, planos de edificación, mapas del lote y certificados urbanísticos); la contratación de supervisores externos, ingenieros o inspectores (si es necesario); la obtención de todas las autorizaciones, licencias, permisos y certificados; la presentación de todas las notificaciones necesarias; y la solicitud y recepción de todas las visitas de inspección exigidas (excepto si son completadas por un inspector externo privado). También registra los procedimientos para obtener la instalación de servicios de agua y cloaca. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.

Descripción del indicador

La información contemplada en el indicador Obtención de Permisos de Edificación ha sido recopilada a través de encuestas a empresas constructoras y asesoramiento de arquitectos e ingenieros matriculados en los colegios de profesionales correspondientes. Asimismo, se han consultado los sitios web pertenecientes a cada municipalidad, así como también los referidos al Concejo Deliberante, dado que la normativa que rige en esta materia es de carácter municipal. Por último, es sustancial hacer referencia a las consultas telefónicas realizadas a las distintas secretarías y/o departamentos de cada municipio, siendo ésta última una de las principales fuentes de información.

Al analizar la dinámica de las diferentes ciudades, si bien se observan semejanzas entre los procedimientos incluidos a priori, los resultados son disímiles. Las disparidades más notorias ocurren en la primera etapa del trámite, a la hora de presentar la carpeta para la obtención del permiso de construcción, y en la última, cuando se solicita la habilitación comercial.

Los costos que deben afrontarse difieren notablemente en cada distrito. El mayor impacto en esta categoría corresponde al pago del Derecho de Obra o Derecho de Construcción. Si bien este costo depende invariablemente de los metros cuadrados de la obra, en la mayoría de los casos se ve afectado por el valor del metro cuadrado de construcción en el

Qué mide el indicador

■ Procedimientos para construir un depósito (número)

- Presentar todos los documentos pertinentes y obtener todos los permisos, licencias y certificados necesarios.
- Presentar todas las notificaciones requeridas y recibir todas las inspecciones necesarias.
- Obtención de conexiones de servicios para agua y cloaca.
- Registro del depósito después de su finalización.

■ Tiempo requerido para completar cada procedimiento (días calendario)

- No incluye el tiempo dedicado a la recopilación de información.
- Cada procedimiento comienza en un día separado.
- El tiempo mínimo para un procedimiento es de 1 día. Los procedimientos que pueden completarse completamente en línea se cuentan como medio día.

- El procedimiento se considera completado una vez que se recibe el documento final.
- Refleja el tiempo que transcurre en la práctica, sin contacto previo con los funcionarios.

■ Costo requerido para completar cada procedimiento (% del valor del depósito)

- Costos oficiales solamente, no incluye sobornos.
- Impuesto al valor agregado (IVA) excluido.

■ Subíndice de Calidad de Información (0-10)

- El puntaje resulta de la suma entre los siguientes componentes:
 - Información relevante de fácil acceso (0-3)
 - Calidad del sitio web de la municipalidad (0-5)
 - Información sobre nueva conexión de Agua y Cloacas (0-1)
 - Información relevante por vía telefónica (0-1)

Supuestos del estudio de caso

Con el objetivo de obtener información que resulte comparable entre las diversas economías provinciales, se consideran determinados supuestos.

■ La empresa constructora

- Funciona en la ciudad más importante para hacer negocios de cada provincia.
- Es una SRL de propiedad privada y tiene cinco dueños que son empresarios locales.
- Ha pagado todos los impuestos y ha contratado todos los seguros que son necesarios para la actividad general del negocio.
- Dispone de todas las licencias y seguros para llevar a cabo proyectos de edificación.
- Cuenta con 60 constructores y otros empleados, todos ellos argentinos y con la pericia técnica y experiencia profesional necesaria.
- Tiene un arquitecto y un ingeniero, ambos con licencia e inscriptos en el colegio correspondiente.

■ El terreno en el cual se construirá el depósito

- Es 100% propiedad de la empresa constructora, inscripto adecuadamente en el catastro y en el registro de bienes inmuebles.
- Tiene una extensión de 929 m².
- No estará situado en un área comercial o industrial con régimen impositivo especial.
- Será una obra nueva en un terreno donde no han habido construcciones previas, donde no hay árboles, fuentes naturales de agua, reservas naturales o monumentos históricos de ningún tipo.
- Tendrá acceso por ruta y se encontrará en el área periférica urbana de la ciudad más importante para hacer negocios de cada provincia.
- Incluirá el equipamiento técnico necesario para ser plenamente operativo.
- Se emplearán 30 semanas en la construcción, sin incluir las demoras ocasionadas por las exigencias legales y administrativas.

■ Documentación

- Se cuenta con planos arquitectónicos y técnicos completos, preparados por un arquitecto con licencia. En caso de ser requisito pasos adicionales, tales como la obtención de documentación adicional o aprobaciones por parte de agencias externas, estos serán registrados como procedimientos.
- Tanto la escritura del inmueble como todos los planos (de arquitectura, sanitarios, eléctricos, etc.), fueron aprobados y sellados por escribano público y/o Colegio de Profesionales correspondiente.
- Se cuenta con un mapa topográfico o mensura del terreno, el cual mide la variación en niveles en el terreno específico.
- Se cuenta con un certificado de habilitación de matrícula profesional de Consejo o Colegio Profesional correspondiente.

- Se cuenta con la documentación (certificados/informes/visados) emitida por Bomberos, Policía o elaborada por profesionales matriculados en el Colegio de Profesionales correspondiente, tales como mapa o croquis de instalación de Bomberos, informes técnicos, plano de instalaciones y defensa contra incendio y salida de emergencia, plano de seguridad y evacuación, entre otros.

■ Especificaciones del depósito

- Tendrá dos niveles, ambos sobre el suelo, con una superficie total de 1.300,6 m². La altura de cada piso será de 3 metros.
- Se utilizará para el almacenamiento de mercancías no peligrosas (por ejemplo, libros).
- No tendrá medios de circulación electromecánica (ascensores, montacargas, rampas móviles, escaleras mecánicas, entre otros) ni instalaciones electromecánicas (motores, máquinas o grúas).

■ Conexión de agua y sistema cloacal

- Estará a 150 metros de la fuente de agua y la canalización de desagüe. Existe la infraestructura adecuada para proveer el servicio de agua y desagüe cloacal. No deberá realizarse ninguna construcción respecto a esto.
- Tendrá un nivel constante de demanda de agua y de flujo de desagüe a lo largo de todo el año. El consumo promedio de agua será de 662 litros diarios y tendrá un flujo promedio de desagüe de 568 litros diarios.
- La conexión al agua será de 1 pulgada de diámetro y la del drenaje será de 4 pulgadas.
- No requerirá agua con fines de prevención de incendios; en su lugar se empleará un sistema de extinción en seco. Si por ley se exigiere un sistema húmedo de extinción, se entenderá que el consumo de agua que se especifica a continuación también cubre la cantidad de agua necesaria para la prevención de incendios.
- Todos los costes materiales y laborales deben tenerse en cuenta en el costo de conexión al agua y de cloacas.

■ Valor estimado del depósito

Está valorizado en 8.973.373,3 pesos ARS (38 veces el ingreso per cápita de Argentina).

■ Impacto Ambiental

Por la especificidad que requiere obtener un Certificado de Evaluación de Impacto Ambiental, y la variabilidad de días y costos que presenta este procedimiento en cada una de las provincias argentinas, se ha decidido suponer que la empresa constructora ya cuenta con el mismo. Es posible realizar esta generalización dado que es un procedimiento que se requiere para obtener un permiso de edificación en todas y cada una de las jurisdicciones.

distrito, y por un coeficiente fijado por la Ordenanza Tarifaria Municipal correspondiente. A ello se le suman costos de menor jerarquía, entre los que se cuentan la Habilitación Comercial o el Derecho de Conexión de Agua y/o Cloaca. En contraposición, trámites tales como la obtención de certificaciones, visados e inspecciones son mayormente uniformes en todo el territorio argentino.

El tiempo necesario para obtener el permiso de edificación también presenta disparidades entre las jurisdicciones. Aquí, la dispersión responde principalmente a los días que se necesitan para obtener la aprobación de planos y recibir las inspecciones que cada localidad dispone.

Análisis de resultados

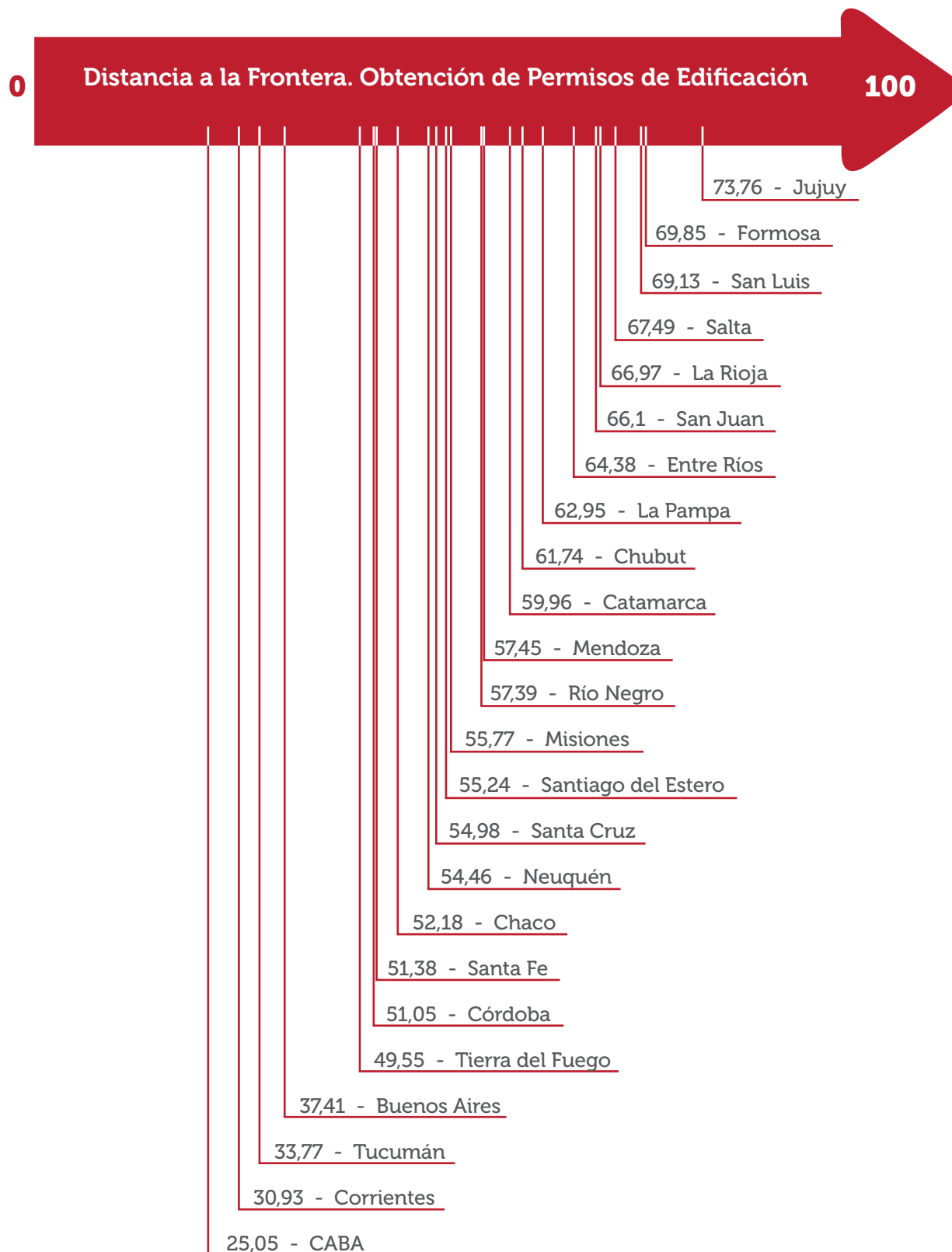
La recopilación de datos contempla tres componentes: procedimientos (correspondiente a la cantidad de trámites), tiempo (medido en días calendario), y costo (representado en porcentaje del valor del depósito). A su vez, el presente indicador comprende un Subíndice de Calidad de Información, que busca evaluar la calidad de la información disponible en lo que respecta a la obtención de permisos de edificación en cada jurisdicción. Estos componentes, ponderados de igual forma, fueron utilizados para la conformación de un ranking que clasifica las distintas ciudades, en representación de sus provincias, desde la mejor performance (posición 1) a la peor (posición 24). Por su parte, la distancia a la frontera mide cuán cerca se encuentra una determinada provincia de obtener el mejor desempeño para ese indicador, siendo 100 el mejor puntaje, y 0 el más bajo.

Tabla 2.1. Indicador Obtención de Permisos de Edificación

Indicador Obtención de Permisos de Edificación							
Provincia	Ciudad	Ranking	Distancia a la Frontera	Procedimientos (número)	Tiempos (días calendario)	Costo (% del valor del almacén)	Subíndice de Calidad de Información (0-10)
Jujuy	SS de Jujuy	1	73,76	13	78,5	0,71	3
Formosa	Formosa	2	69,85	14	127	0,59	5
San Luis	San Luis	3	69,13	14	134	0,90	6
Salta	Salta	4	67,49	14	156	1,00	7
La Rioja	La Rioja	5	66,97	16	121	0,84	6
San Juan	San Juan	6	66,1	13	147	0,54	4
Entre Ríos	Paraná	7	64,38	16	137	1,55	8
La Pampa	Santa Rosa	8	62,95	12	109	2,39	5
Chubut	Comodoro Rivadavia	9	61,74	12	126	1,80	4
Catamarca	SF del V de Catamarca	10	59,96	15	176	0,81	6
Mendoza	Mendoza	11	57,45	15	135	3,45	10
Río Negro	SC de Bariloche	12	57,39	12	167	1,08	3
Misiones	Posadas	13	55,77	18	181	0,68	7
Santiago del Estero	Santiago del Estero	14	55,24	17	172	0,49	5
Santa Cruz	Río Gallegos	15	54,98	12	165	1,04	2
Neuquén	Neuquén	16	54,46	13	208	0,63	4
Chaco	Resistencia	17	52,18	14	152	1,42	3
Santa Fe	Rosario	18	51,38	19	165,5	1,23	7
Córdoba	Córdoba	19	51,05	16	165	1,80	6
Tierra del Fuego	Río Grande	20	49,55	21	140	0,65	5
Buenos Aires	La Plata	21	37,41	21	219	0,79	6
Tucumán	SM de Tucumán	22	33,77	22	181	1,36	5
Corrientes	Corrientes	23	30,93	20	219	1,12	4
CABA	CABA	24	25,05	18	208	3,38	6

Fuente: base de datos de IPDE.

Nota: la clasificación se basa en la media de la distancia a la frontera de los subindicadores número de procedimientos, tiempo, costo y Subíndice de Calidad de Información, asociados a la obtención de permisos de edificación. La distancia a la frontera está normalizada dentro de un rango de 0 a 100, 100 representando la frontera de las mejores prácticas. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.



El podio del ranking Obtención de Permisos de Edificación lo ocupa San Salvador de Jujuy (Jujuy), Formosa (Formosa) y San Luis (San Luis). Le siguen, en orden, Salta (Salta), La Rioja (La Rioja) y San Juan (San Juan). Estas seis ciudades requieren una media de 14 procedimientos que implican un promedio de 127 días para la obtención del permiso de edificación y un costo de 0,76%.

En el extremo opuesto del ranking se encuentran, de peor a mejor, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes (Corrientes), San Miguel de Tucumán (Tucumán), La Plata (Buenos Aires), Río Grande (Tierra del Fuego) y Córdoba (Córdoba), con una cantidad de trámites promedio que ronda los 189 días, 20 procedimientos y un costo medio que supera el 1,5% del valor del depósito.

Subíndice de Calidad de Información (CDI)

El presente indicador Obtención de Permisos de Edificación, por su naturaleza, presenta numerosos procedimientos a realizarse en distintas oficinas gubernamentales, involucra a profesionales de diversas áreas, y es bien específico en cuanto a cómo debe construirse una obra, habilitarse el edificio, y luego el comercio. Esto, a todas luces, resulta en un proceso complejo y meticuloso, que sólo pueden llevarlo adelante profesionales del rubro. Más aún, resulta menester que dichos profesionales cuenten con la información relevante de la manera más rápida, práctica y eficiente posible, dado que ello, en la hipótesis del presente trabajo, se traduce en un mejor ambiente de negocios. Sin embargo, al procesar los datos obtenidos de la investigación en esta materia, ha resultado evidente que dicha información se encuentra, en el mejor de los casos, dispersa, o sólo al alcance de quienes saben cómo encontrarla. Ciertas normativas, como los códigos de edificación y las ordenanzas tarifarias municipales, deben ser de fácil acceso para cualquier ciudadano interesado en ellas. Es por ello que se ha elaborado este subíndice que mide la calidad de la información disponible, a fines de ponderar también este componente en el ranking del indicador.

El Subíndice de Calidad de Información otorga a cada ciudad relevada un puntaje entre 0 y 10, en donde se tiene en cuenta el fácil (o no) acceso a normativas vigentes para cada municipio (código de edificación, ordenanzas tarifarias y

cálculo de derechos de obra); la calidad de la información que brinda el sitio web de cada ciudad; la publicación (o no) de información relevante para obtener una nueva conexión de agua o cloacas; y la posibilidad (o no) de evacuar dudas o realizar consultas en forma telefónica respecto a la obtención del permiso de edificación o la habilitación comercial. Por cada respuesta afirmativa, la ciudad obtiene un punto.

Tabla 2.2. Subíndice Calidad de Información		¿Es de fácil acceso el código de Edificación de la ciudad?	¿Es de fácil acceso la Ordenanza Tarifaria vigente?	¿Es de fácil acceso la información relevante para poder calcular el Derecho de Obra?	El sitio web de la Municipalidad ¿brinda información sobre los procedimientos para realizar el trámite específico de Obtención de Permisos de Edificación?
Provincia	Ciudad				
Mendoza	Mendoza	SI	SI	SI	SI
Entre Ríos	Paraná	SI	SI	SI	SI
Santa Fe	Rosario	SI	SI	SI	SI
Salta	Salta	SI	SI	SI	SI
Misiones	Posadas	SI	SI	SI	SI
San Luis	San Luis	SI	SI	SI	NO
La Rioja	La Rioja	SI	SI	NO	SI
Córdoba	Córdoba	SI	SI	SI	NO
CABA	CABA	SI	SI	SI	SI
Catamarca	SF del V de Catamarca	SI	SI	NO	SI
Buenos Aires	La Plata	SI	SI	NO	SI
Tucumán	SM de Tucumán	NO	SI	SI	SI
Tierra del Fuego	Río Grande	SI	SI	SI	SI
Santiago del Estero	Santiago del Estero	SI	SI	NO	SI
La Pampa	Santa Rosa	SI	SI	SI	SI
Formosa	Formosa	SI	SI	NO	SI
San Juan	San Juan	NO	SI	SI	SI
Neuquén	Neuquén	SI	SI	NO	SI
Corrientes	Corrientes	SI	SI	SI	NO
Chubut	Comodoro Rivadavia	SI	SI	NO	NO
Río Negro	SC de Bariloche	SI	SI	NO	NO
Jujuy	SS de Jujuy	NO	SI	SI	NO
Chaco	Resistencia	SI	SI	SI	NO
Santa Cruz	Río Gallegos	SI	NO	NO	NO

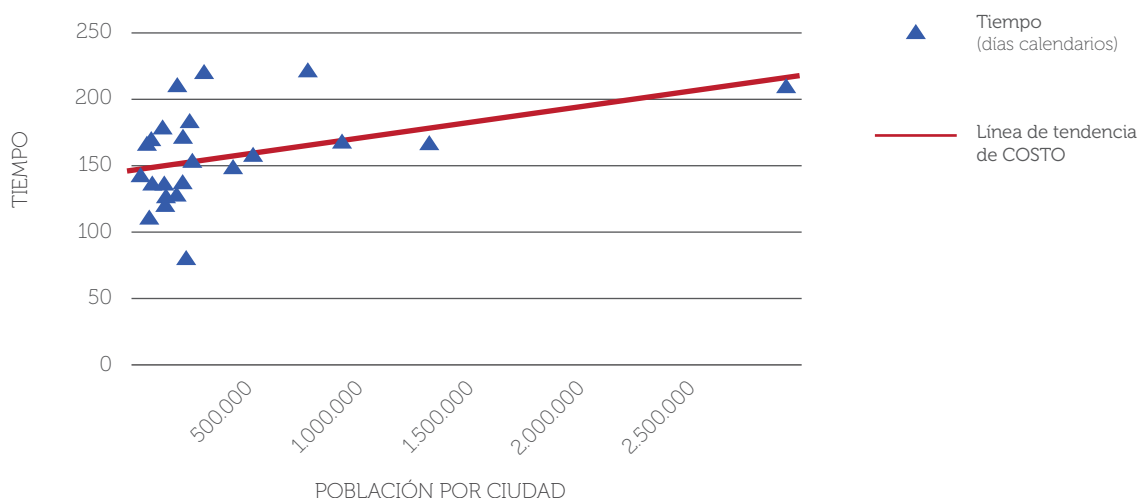
El sitio web de la Municipalidad ¿brinda información sobre el tiempo para realizar el trámite específico de Obtención de Permisos de Edificación?	El sitio web de la Municipalidad ¿brinda información sobre los procedimientos para realizar el trámite específico de Habilitación Comercial?	El sitio web de la Municipalidad ¿brinda información sobre los costos para realizar el trámite específico de Habilitación Comercial?	El sitio web de la Municipalidad ¿brinda información sobre el tiempo para realizar el trámite específico de Habilitación Comercial?	La empresa que provee Agua y/o Cloacas. ¿publica en algún sitio toda la información relevante (requisitos, costo y tiempo) para realizar una nueva conexión?	¿Es posible conseguir información relevante para Obtener el Permiso de Edificación y/o Habilitación Comercial por vía telefónica?	Subíndice de Calidad de Información (0-10)
SI	SI	SI	SI	SI	SI	10
SI	SI	NO	SI	NO	SI	8
NO	SI	SI	NO	NO	SI	7
NO	SI	SI	NO	NO	SI	7
NO	SI	SI	NO	NO	SI	7
NO	SI	SI	NO	SI	NO	6
SI	SI	NO	SI	NO	NO	6
NO	SI	NO	NO	SI	SI	6
NO	SI	NO	NO	NO	SI	6
SI	SI	NO	NO	SI	NO	6
NO	SI	SI	NO	NO	SI	6
NO	SI	NO	NO	NO	SI	5
NO	SI	NO	NO	NO	NO	5
NO	SI	NO	NO	NO	SI	5
NO	NO	NO	NO	NO	SI	5
NO	SI	NO	NO	NO	SI	5
NO	SI	NO	NO	NO	NO	4
NO	SI	NO	NO	NO	NO	4
NO	SI	NO	NO	NO	NO	4
NO	SI	NO	NO	NO	SI	4
NO	NO	NO	NO	NO	SI	3
NO	NO	NO	NO	NO	SI	3
NO	NO	NO	NO	NO	NO	3
NO	SI	NO	NO	NO	NO	2

El análisis del Subíndice CDI arroja que, sobre un puntaje total de 10, únicamente cinco ciudades obtuvieron una calificación entre 7 y 8, siendo éstas Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Posadas. De este primer grupo, resulta interesante destacar que Mendoza obtuvo el puntaje máximo, lo cual responde a su sistema de Ventanilla Única que va guiando todo el proceso de obtención de un permiso de obra. Con un puntaje de 6 le siguieron los municipios de La Plata, CABA, Córdoba, San Fernando del Valle de Catamarca, San Luis y La Rioja. Los 13 distritos restantes obtuvieron una calificación igual o menor a 5.

¿Mayor población, trámites más lentos?

Si bien el presente capítulo no busca indagar en profundidad sobre las relaciones entre los componentes del indicador, dado que tiene como fin presentar información objetiva sobre el proceso de construir y habilitar un negocio, una simple relación se desprende de los datos: parece existir una correlación positiva entre la población de cada ciudad y la demora en llevar a cabo la totalidad de los procedimientos. Esta situación expone que parte de la variabilidad del tiempo puede ser explicada por cuellos de botella que pueden generarse en ciudades con mayor población, algo que de ningún modo contradice el sentido común.

Población por ciudad frente a tiempo



¿Qué reformar?

■ Disponibilidad de información en línea

Facilitar la documentación requerida a las empresas constructoras, arquitectos, ingenieros, y otros profesionales intervinientes, al momento de solicitar la obtención de un permiso de construcción, permitiría mejorar la calidad de la documentación técnica presentada y reducir sustancialmente los plazos de los trámites. Siendo la Municipalidad la autoridad que expide dicho permiso, debería suministrar información a lo largo de todo el proceso.

Cabe destacar que, si bien suele ser posible averiguar en qué consiste el trámite por vía telefónica o, en la mayoría de los casos, de manera presencial, resultaría aún más beneficioso que existiera la posibilidad de obtener esta información en línea. En algunos municipios, como Resistencia, San Salvador de Jujuy, San Carlos de Bariloche y Río Gallegos, no se encuentra información relevante en los sitios web de las municipalidades. Por otro lado, en otros municipios, como Mendoza, Paraná, San Fernando del Valle de Catamarca y Rosario, el interesado se encontrará con que es posible obtener alguna explicación en línea.

Asimismo, es de crucial importancia que los profesionales tengan la posibilidad de obtener los códigos de edificación y las ordenanzas municipales actualizados de manera virtual. De esta manera, se economiza en tiempo y costo tanto del arquitecto y/o ingeniero correspondiente, como así también de la administración pública.

■ Digitalización e informatización

Los beneficios de digitalizar procedimientos son múltiples. La posibilidad de realizar trámites en línea reduce las interacciones con la administración pública y el margen para que se realicen procedimientos irregulares, dando lugar, así, a una gestión más eficiente. Además, al permitir adjuntar documentos en diferentes formatos, se omite la necesidad de trasladar papeles y se facilita el almacenamiento de información.

■ Sistema de Ventanilla Única

Para poder obtener un Permiso de Edificación, es necesario realizar múltiples procedimientos en los que intervienen distintas áreas de cada municipalidad. Esto implica solicitar y obtener aprobaciones de distintos tipos de documentación técnica, específica de cada departamento involucrado (direcciones de obras particulares, catastros, rentas, entre otros). Al no existir un sistema de Ventanilla Única, el interesado debe interactuar con cada una de las distintas áreas de manera individual, profundizando el entramado burocrático y dilatando, así, el proceso en su totalidad. Por el contrario, contar con una plataforma en línea o presencial en la cual resolver todos y cada uno de los trámites necesarios, permitiría a los profesionales correspondientes conocer el grado de avance de cada trámite en tiempo real, posibilitando realizar un seguimiento que permita la detección de posibles fases que pudieran estar ralentizando el proceso.

Respecto a la obtención de Permiso de Edificación, cabe destacar a Mendoza como la única ciudad relevada en la cual es posible solicitarlo y obtenerlo a través del sistema de Ventanilla Única. Allí, el solicitante presenta la documentación en una única dirección, la cual es redirigida hacia las diferentes secretarías en forma de trámites internos para recibir las aprobaciones y visados correspondientes. Posadas también utiliza el sistema de Ventanilla Única para la obtención de la habilitación municipal.



OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

El indicador Obtención de Electricidad registra todos los procedimientos necesarios para que una empresa obtenga la instalación del medidor de energía eléctrica y la posterior conexión de suministro permanente para un depósito comercial. Entre estos procedimientos se incluyen las solicitudes y contratos con las empresas de suministro eléctrico, todas las aprobaciones necesarias de otros organismos, y las obras de conexión que se realizan entre la red de la empresa de suministro y la entrada al depósito. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.

Descripción del indicador

Debido a la multiplicidad de escenarios que pueden presentarse a la hora de solicitar una nueva conexión eléctrica en cada una de las ciudades relevadas, incluso en cada manzana de las mismas, el presente indicador Obtención de Electricidad se vuelve muy sensible al estudio de caso elaborado. Procedimientos tales como la obtención del costo de una obra externa necesaria para la conexión eléctrica depende, en muchos casos, de la localización exacta del depósito comercial construido. En ciertas ciudades, por ejemplo, dicho costo puede ser cubierto por la empresa que suministra el servicio eléctrico si la misma lo considera rentable. Es decir, para poder evaluar ese trámite, resultaría indispensable homogeneizar el criterio de análisis espacial no sólo a nivel ciudad sino también a niveles zonales dentro de cada ciudad.

Interrogantes similares surgen en relación al tipo de obra a realizarse: ¿los pilares se encuentran en condiciones?; en caso de no estarlo, ¿quién debe afrontar los costos de reparación?; si el cableado que suministra la energía se encuentra a "x" metros del almacén, ¿los postes que sostienen el cableado están colocados?; en caso de no estarlos, ¿la empresa que suministra la energía debe instalarlos?; ¿resulta necesario realizar obras sobre el espacio público? Debido a que la lista de interrogantes puede devenir infinita, es necesario simplificar la realidad. Sin embargo, el estudio de caso de ningún modo elimina el entramado burocrático y los plazos dispuestos por la administración para la obtención de una nueva conexión eléctrica. Esto último es lo que busca medir el presente indicador.

Qué mide el indicador

■ Procedimientos para obtener una conexión de electricidad (número)

- Presentar todos los documentos pertinentes y obtener todas las autorizaciones y permisos necesarios.
- Completar todas las notificaciones requeridas y recibir todas las inspecciones necesarias.
- Concluir cualquier contrato de suministro necesario.
- Recibir los trabajos externos de instalación de medidor y conexión.

■ Tiempo requerido para completar cada procedimiento (días calendario)

- El tiempo mínimo para un procedimiento es de 1 día. Los procedimientos que pueden completarse completamente en línea se cuentan como medio día.
- Cada procedimiento comienza en un día separado.
- No incluye el tiempo dedicado a la recopilación de información.

- Refleja lo que ocurre en la práctica, suponiendo que el interesado no tuvo contacto previo con los funcionarios.

■ Costo requerido para completar cada procedimiento (% del PBI per cápita a precios corrientes)

- Costos oficiales solamente, sin sobornos.
- El impuesto al valor agregado es excluido en los pagos realizados en carácter de "Derecho a conexión" detallados en los cuadros tarifarios.

■ Subíndice de Calidad de la Información (0-5)

- El puntaje resulta de la suma entre los siguientes componentes:
 - Calidad del sitio web la empresa que provee energía (0-4)
 - Facilidad de acceso a la información relevante (0-1)

Supuestos del estudio de caso

Para poder comparar entre las economías provinciales, se ha definido un estudio de caso con los siguientes supuestos.

■ El consumo mensual

- El almacén opera 30 días al mes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (8 horas al día), con un equipo utilizado al 80% de la capacidad. No hay cortes de electricidad. El consumo de energía mensual es de 26,880 kilovatios-hora (kWh); el consumo por hora es de 112 kWh.
- Si existen múltiples proveedores de electricidad, el proveedor más barato provee al depósito.

■ El depósito

- Es propiedad del empresario.
- Está ubicado en la ciudad más importante para hacer negocios de cada provincia, en una zona donde se encuentran otros depósitos comerciales similares.
- En la zona de ubicación el cableado es aéreo y el mismo se encuentra en óptimas condiciones, así como también lo están los pilares que lo sostienen. Estas instalaciones de cableado aéreo pasan sobre la ubicación exacta del depósito, por lo cual no es necesaria la realización de obras externas para efectuar la bajada de línea e instalación del medidor.
- No existen limitaciones físicas en la zona de ubicación de la propiedad.
- Es una nueva construcción que se conecta a la red eléctrica por primera vez y cumple con todos los requerimientos de habilitación solicitados por el municipio de la jurisdicción.
- El propietario posee todos los planos de instalación eléctrica y electromecánica, así como también los demás documentos que pudieran ya haber sido solicitados y/o confeccionados al momento de realizar las obras de instalaciones eléctricas internas y la habilitación municipal.

- La construcción tiene dos pisos y una superficie total aproximada de 1.300,6 metros cuadrados. La parcela de tierra donde se construyó el almacén tiene 929 metros cuadrados.
- Se utiliza para el almacenamiento de mercancías refrigeradas.
- Cuenta con aproximadamente 30 bocas de expendio eléctrico.

■ La conexión eléctrica

- Es una conexión permanente.
- Es trifásica, de cuatro cables de 140 kVA (capacidad contratada) y un factor de potencia de 1 (1 kVA = 1 kW). Si el voltaje es de 220/400 V, la corriente es de casi 200 amperios.
- La conexión a la red de distribución de energía es realizada en baja o media tensión y por vía aérea.
- Ya se ha colocado el cableado interno hasta el panel de reparaciones/tablero del cliente y la base del medidor, así como también se ha cumplimentado con todos los requisitos de instalación eléctrica interna solicitados.

Obtener una conexión permanente de electricidad en las ciudades relevadas de Argentina implica un número de procedimientos similar en las diferentes ciudades. Además, los trámites a realizar son relativamente homogéneos. Prácticamente todas las ciudades requieren la entrega presencial de la documentación requerida para el alta comercial del servicio o la solicitud de factibilidad técnica de suministro.

Por otro lado, los costos y tiempo varían considerablemente. Tal es esta situación, que los interesados en obtener una nueva conexión en algunas de las ciudades que han quedado rezagadas en el ranking deben esperar 50 días o más, mientras que a los localizados en las ciudades más privilegiadas les puede llevar menos de 20 días. El estudio revela que gran parte del tiempo lo insume la espera por la conexión del servicio, procedimiento posterior a la solicitud comercial del mismo, y no tanto los trámites previos.

Asimismo, la variabilidad de los costos (expresados como porcentaje del PIB per cápita) también es apreciable. Este componente mayoritariamente concentra valores que corresponden a los derechos de conexión y costo por la instalación del medidor. La suma que abonará un empresario en la ciudad que presenta la peor performance es aproximadamente 30 veces lo que pagaría en la de mejor desempeño. Naturalmente, la falta de un criterio unificado hace posible tales dispersiones, que serán analizadas en detalle a continuación.

Análisis de los resultados

La recopilación de datos se enfocó en cuatro aspectos: los trámites necesarios para obtener un nuevo suministro eléctrico, el tiempo previsto para adquirir la conexión, el costo de los procedimientos, y la calidad de la información que proveen las empresas de energía. Estos elementos, ponderados de igual forma, fueron utilizados para la conformación de un ranking que clasifica las distintas ciudades, en representación de sus provincias, desde la mejor performance (posición 1) a la peor (posición 24). Por su parte, la distancia a la frontera mide cuán cerca se encuentra una determinada provincia de obtener el mejor desempeño para ese indicador, siendo 100 el mejor puntaje, y 0 el más bajo.

Tabla 3.1. Indicador Obtención de Electricidad

Indicador Obtención de Electricidad							
Provincia	Ciudad	Ranking	Distancia a la Frontera	Procedimientos (número)	Tiempos (días calendario)	Costo (% del valor del almacén)	Subíndice de Calidad de Información (0-5)
Chaco	Resistencia	1	71,13	5	33	1,67	5
CABA	CABA	2	68,81	4	38,5	4,02	4
Jujuy	SS de Jujuy	3	67,11	5	18	1,35	2
Tucumán	SM de Tucumán	4	66,17	4	25	0,85	0
Misiones	Posadas	5	64,13	4	45	2,21	3
Chubut	Comodoro Rivadavia	6	61,07	5	14	4,71	2
Neuquén	Neuquén	7	60,64	5	23	6,38	4
Santa Fe	Rosario	8	60,12	4	50	2,45	3
Tierra del Fuego	Río Grande	9	59,31	5	15	1,28	0
La Rioja	La Rioja	10	58,63	5	27	0,35	1
San Luis	San Luis	11	55,37	5	37	0,92	2
San Juan	San Juan	12	55	4	51	0,31	1
Formosa	Formosa	13	54,1	5	26	0,43	0
Buenos Aires	La Plata	14	52,73	4	45	6,59	3
Entre Ríos	Paraná	15	49,91	6	30	1,96	3
Córdoba	Córdoba	16	49,85	5	41	3,93	3
Corrientes	Corrientes	17	48,46	6	36	0,96	3
Salta	Salta	18	46,98	6	30	1,16	2
Santiago del Estero	Santiago del Estero	19	45,96	5	46	2,21	2
Mendoza	Mendoza	20	44,9	6	22	5,97	3
Santa Cruz	Río Gallegos	21	44,18	6	31	7,76	5
La Pampa	Santa Rosa	22	39,59	6	22	9,93	4
Río Negro	SC de Bariloche	23	34,29	6	50	2,77	3
Catamarca	SF del V de Catamarca	24	33,06	6	37	0,85	0

Fuente: base de datos de IPDE.

Nota: la clasificación se basa en la media de la distancia a la frontera de los subindicadores número de procedimientos, tiempo, costo y Subíndice de Calidad de Información, asociados a la obtención de una conexión de electricidad. La distancia a la frontera está normalizada dentro de un rango de 0 a 100, 100 representando la frontera de las mejores prácticas. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.



El análisis de la tabla precedente ayuda a dilucidar una acentuada homogeneidad en cuanto al número de procedimientos que una empresa debe realizar para obtener una nueva conexión permanente de electricidad en ciertas ciudades de Argentina. La cantidad de trámites varía de 4 a 6: 6 ciudades logran resolver este paso en 4 procedimientos, 10 ciudades lo hacen en 5, y las restantes 8 ciudades lo logran en 6 pasos.

Por otro lado, la revisión de la columna de costos (expresado en % PIB per cápita en precios corrientes) refleja una gran variabilidad, que va desde 0,31% (San Juan) a 9,93% (Santa Rosa), siendo este último el valor más elevado que debe abonarse para obtener una conexión nueva y permanente de energía eléctrica para el caso de estudio analizado. En adición, el tiempo de espera previsto para adquirir el suministro eléctrico (medido en días calendario) también refleja un amplio rango (de 14 días -en Comodoro Rivadavia- a 51 días -en San Juan-).

El podio del Indicador Obtención de Electricidad le corresponde a Resistencia (Chaco), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y San Salvador de Jujuy (Jujuy). Estas tres ciudades son las que mejor logran combinar los 4 componentes que mide este indicador: tiempo, costos, número de procedimientos y calidad de la información disponible. En promedio, les lleva 5 pasos, 30 días y 2,35% de costos (en % del PIB per cápita a precios corrientes). El puntaje promedio para el Subíndice de Calidad de Información para estos distritos es 4.

Por contraste, Santa Rosa (La Pampa), San Carlos de Bariloche (Río Negro) y San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca) ocupan los últimos puestos, con 6 procedimientos a resolver, una media de 36 días y un costo de 4,52%. En cuanto a la calidad de información, sólo obtienen un puntaje promedio de 2.

Subíndice de Calidad de Información (CDI)

Curiosamente, el indicador Obtención de Electricidad, que mucho revela a través de los resultados, se ha manifestado aún más durante el proceso de adquisición de los mismos. Debido a que cuestiones de este índole difícilmente puedan quedar plasmadas en su totalidad en exposiciones cuantitativas, resulta pertinente dedicarle una sección individualizada.

La recolección de datos del presente indicador incluye encuestas tanto a especialistas matriculados del rubro eléctrico, como a las empresas suministradoras de energía en la ciudad más importante para hacer negocios en cada provincia. Además, se ha realizado una exhaustiva búsqueda de información en sitios web, entrevistas presenciales, e innumerables consultas telefónicas a centros de atención especializados.

En lo que respecta a la concesión de suministro eléctrico, todos los mencionados caminos para la obtención de la información congeniaron en un particular aspecto: las empresas argentinas encargadas de provisionar las calles, hogares, comercios e industrias con energía eléctrica, en la mayoría de los casos, no otorgan información detallada y sistemática de los procedimientos, costos y requisitos que cualquier ciudadano particular podría eventualmente requerir para conectar su nuevo negocio al suministro de energía.

La falta de transparencia en la información, así como también la dificultad para conseguirla, representa una lesión a la estructura económica de una ciudad al condicionar la posibilidad del cálculo económico de los agentes, incrementando los costos transaccionales y los plazos de operación, y disminuyendo la competitividad. Es por ello que, con el interés de brindar herramientas útiles para la elaboración de políticas que promuevan una mayor facilidad en la apertura de nuevas empresas, el presente capítulo incluye la elaboración de un subíndice que evalúa la calidad de la información brindada, abriendo paso a la posibilidad de identificar las debilidades y aciertos en esta materia.

Esta sección evalúa el detalle y la cantidad de información que brinda cada sitio web y servicio de atención telefónica de las empresas proveedoras de energía en relación al estudio de caso particular. Con el mencionado fin de cuantificar la accesibilidad a la información, se elaboró una clasificación que va de 0 a 5, siendo este último el valor

representativo de una buena provisión de las especificaciones a través del sitio web de la empresa y de la atención telefónica. El logro de la categoría máxima se consigue solamente cuando la respuesta a las siguientes preguntas resulta afirmativa en todos los casos, sumando 1 punto por cada una de ellas:

El sitio web de la empresa,

1. ¿Detalla con claridad los procedimientos para obtener un nuevo suministro de energía eléctrica?
2. ¿Incluye los costos de cada procedimiento?
3. ¿Estipula los plazos de duración de cada trámite?
4. ¿Informa sobre los requerimientos técnicos que debe cumplir el establecimiento?
5. ¿Es posible adquirir toda la información solicitada en un mismo sitio, ya sea telefónicamente, o en el mismo sitio web?

En contraste, por cada respuesta negativa, se obtiene un puntaje 0.

La tabla 3.2. a continuación detalla los resultados obtenidos.

Tabla 3.2. Subíndice Calidad de Información

Provincia	Ciudad	Empresa encargada de suministrar la energía eléctrica
Chaco	Resistencia	SECHEEP
Santa Cruz	Río Gallegos	SPSE
CABA	CABA	EDESUR
La Pampa	Santa Rosa	CPE
Neuquén	Neuquén	CALF
Buenos Aires	La Plata	Edelap
Córdoba	Córdoba	EPEC
Corrientes	Corrientes	Dpec
Entre Ríos	Paraná	Enersa
Mendoza	Mendoza	Edemsa
Misiones	Posadas	Emsa
Río Negro	SC de Bariloche	Edersa
Santa Fe	Rosario	EPE
Chubut	Comodoro Rivadavia	SCPL
Jujuy	SS de Jujuy	Ejesa
Salta	Salta	Edesa
San Luis	San Luis	Edesal
Santiago del Estero	Santiago del Estero	EDESE
La Rioja	La Rioja	Edelar
San Juan	San Juan	Energía San Juan
Catamarca	SF del V de Catamarca	Ecsapem
Formosa	Formosa	Refsa
Tierra del Fuego	Río Grande	CoopRG
Tucumán	SM de Tucumán	EDET

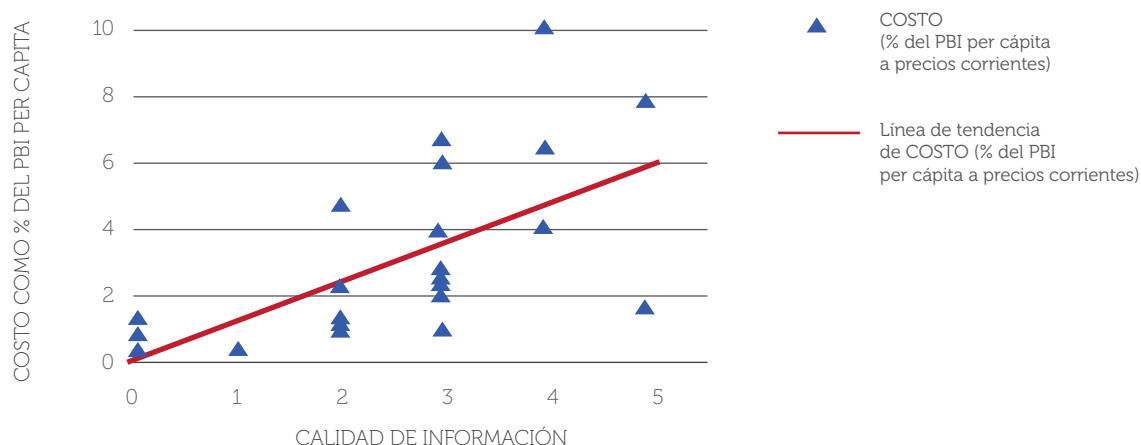
Sólo dos empresas de suministro eléctrico (SECHEEP -Chaco- y SPSE -Río Gallegos-) han alcanzado la máxima categoría posible para este Subíndice CDI (5). Por el contrario, las empresas Refsa (Formosa), Ecsapem (San Fernando del Valle de Catamarca), EDET (San Miguel de Tucumán) y CoopRG (Río Grande) obtuvieron la clasificación más baja (0), lo que se traduce en una precaria prestación de información relevante. Además, de las veinticuatro ciudades estudiadas, sola-

	¿Es posible conseguir toda la información relevante en un sólo lugar, por ejemplo, sitio web, número telefónico, chat personalizado?	El sitio web de la empresa, ¿detalla con claridad los procedimientos a seguir para obtener electricidad a empresas/Grandes Usuarios?	El sitio web de la empresa ¿detalla costos para empresas/Grandes Usuarios?	El sitio web de la empresa ¿detalla tiempos para empresas/Grandes Usuarios?	El sitio web de la empresa ¿detalla los requisitos técnicos que se deben cumplir para obtener el alta de conexión de electricidad?	Subíndice de Calidad de Información (0-5)
	SI	SI	SI	SI	SI	5
	SI	SI	SI	SI	SI	5
	SI	NO	SI	SI	SI	4
	SI	SI	NO	SI	SI	4
	SI	SI	NO	SI	SI	4
	SI	NO	NO	SI	SI	3
	SI	NO	NO	SI	SI	3
	NO	SI	SI	SI	NO	3
	SI	SI	NO	NO	SI	3
	SI	NO	NO	SI	SI	3
	SI	SI	NO	SI	NO	3
	SI	SI	NO	NO	SI	3
	SI	NO	SI	SI	NO	3
	NO	NO	NO	SI	SI	2
	NO	SI	SI	NO	NO	2
	SI	NO	NO	SI	NO	2
	NO	SI	NO	SI	NO	2
	SI	SI	NO	NO	NO	2
	NO	NO	NO	SI	NO	1
	NO	NO	NO	SI	NO	1
	NO	NO	NO	NO	NO	0
	NO	NO	NO	NO	NO	0
	NO	NO	NO	NO	NO	0
	NO	NO	NO	NO	NO	0

mente once de ellas cuentan con cuadros que detallan los costos de conexión que no están sujetos a las particularidades de las obras que deban realizarse, dejando sin establecer los valores para una determinada situación estándar donde la empresa cumpla de antemano con los requisitos técnicos solicitados y que el cableado eléctrico sea apto y esté en las proximidades.

Si bien el presente capítulo no busca indagar en profundidad sobre las relaciones entre los componentes del indicador, dado que tiene como fin presentar información objetiva sobre la conexión de electricidad en un negocio, una simple relación se desprende de los datos: existe una asociación positiva entre los costos de los procedimientos necesarios para obtener una nueva conexión (expresados como % del PIB per cápita a precios corrientes) y la calidad de información prestada por las empresas eléctricas de cada ciudad, medida por el Subíndice CDI.

Costo frente a Calidad de Información



El corolario más relevante que puede derivarse del presente análisis es que los bajos costos de algunas ciudades podría deberse a la existencia de costos ocultos producto de la falta de transparencia o acceso a la información.

¿Qué reformar?

La investigación realizada ha permitido conformar una lista de sugerencias que se espera contribuyan de manera positiva al desempeño provincial, reduciendo los costos y los plazos de los trámites requeridos y facilitando la labor de los agentes económicos al momento de abrir un nuevo comercio.

- **Permitir la presentación conjunta de la documentación para la solicitud de factibilidad técnica y la solicitud de conexión comercial.**

La implementación de esta sugerencia eliminaría la necesidad de acudir a un centro de atención comercial al menos una vez en la mayoría de las provincias. En un contexto de baja calidad de información y alta dispersión, bien vale elaborar propuestas que tiendan a transparentar los procedimientos, acortar los tiempos y reducir los costos que implica la presentación de requerimientos ante múltiples organismos.

- **Proveer, por parte de las empresas suministradoras de energía, un listado de electricistas matriculados que realicen las revisiones del cableado interno cuando sean solicitadas.**

Dado que existen pasos donde se requiere el asesoramiento de un electricista matriculado, resulta plausible proponer la creación de un registro en el que los profesionales del ramo puedan inscribirse para ser localizados fácilmente por las empresas que los requieran.

- **Facilitar información transparente sobre los procedimientos y costos necesarios para obtener una nueva conexión eléctrica.**

Las dificultades para recabar información acerca de las particularidades del procedimiento en cada distrito y conocer fehacientemente los tiempos y costos que demanda a través de cada dependencia involucrada, es un denominador común en todos los distritos relevados. De ello surge la necesidad de mejorar la atención al cliente incorporando, por ejemplo, una línea telefónica especializada para el asesoramiento del rubro comercial, y detallando en las plataformas digitales los trámites, los plazos y los costos que implican. Además de publicar de forma clara los cuadros tarifarios vigentes, que incluyan los trabajos con cargo que son normalmente necesarios para el tipo de conexión eléctrica como la que se precisa para el caso base de este estudio.



REGISTRO DE PROPIEDADES

El indicador Registro de Propiedades examina la totalidad de los trámites necesarios para que una empresa (compradora) pueda adquirir la propiedad de otra empresa (vendedora) y transferir el título de propiedad a nombre de la compradora. En este apartado, con el fin de evaluar el tiempo, el costo y el número de procedimientos requeridos para completar el proceso de transferencia de propiedad, se plantea un escenario en el que un profesional del ramo (un escribano) ayuda a un cliente, una compañía de responsabilidad limitada, a comprar un almacén comercial que está registrado en el Registro de Bienes Inmuebles en la ciudad más importante para hacer negocios en cada provincia. Este caso es una transferencia de propiedad, no la inscripción por primera vez de la misma. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.

Descripción del indicador

El indicador Registro de Propiedades presenta cierta uniformidad en su conjunto de procedimientos en todas las jurisdicciones de Argentina. No obstante, el resultado final se ve fuertemente influenciado por la adaptación de cada uno de ellos a las exigencias provinciales y locales; como así también al formato del organigrama de las oficinas estatales que intervienen en todo el proceso.

El trámite, desde su inicio hasta su fin, cuenta con dos procedimientos que son de índole nacional: la obtención del Certificado de Transferencia de Inmuebles (COTI) y el pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), ambos bajo la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los restantes, que oscilan entre cinco y seis, se realizan en oficinas municipales, delegaciones provinciales y colegios profesionales de notarios. Allí se cuenta la tramitación de certificados de libre deuda, dominiales y de inhibiciones, la confección de la escritura de transferencia del inmueble y su posterior inscripción.

A excepción de los dos trámites de orden nacional que se gestionan en línea a través de los sistemas de AFIP, los procedimientos son, en mayor medida, de carácter presencial; y prácticamente ninguno puede resolverse en el acto, aunque sí con simultaneidad.

Los tiempos de gestión están marcados notablemente por el ritmo que le imprime cada repartición, el grado de informatización y la posibilidad de hacerlos de forma más veloz

Qué mide el indicador

■ Procedimientos para transferir y registrar una propiedad (número)

- Un procedimiento es una interacción del comprador o del vendedor, de sus agentes o de la propiedad con actores externos, incluyendo organismos gubernamentales, inspectores, escribanos y abogados.
- Se incluyen procedimientos previos y posteriores al registro de la propiedad.
- El proceso de registro ocurre en la mejor ciudad para hacer negocios en la provincia.

■ Tiempo requerido para completar los procedimientos (días calendario)

- El tiempo mínimo para un procedimiento es de 1 día. Los procedimientos que pueden completarse completamente en línea se cuentan como medio día.
- No incluye el tiempo que lleva recolectar información sobre los trámites.
- Se supone no existe contacto previo con oficiales intervinientes.
- De existir procedimientos abreviados, se optará por ellos.
- Los procedimientos se consideran completos cuando se obtiene el documento final.

■ Costo requerido para completar los procedimientos (% del valor de la propiedad)

- El costo refleja únicamente los cargos e impuestos oficiales.
- Se excluyen los sobornos.
- Se excluye el impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Supuestos del estudio de caso

Para poder comparar entre las economías subnacionales, se ha definido un estudio de caso con los supuestos a continuación.

■ Las partes

- Tanto la empresa compradora como la vendedora son SRL.
- Están ubicadas en la ciudad más importante para hacer negocios en cada provincia.
- Ambas empresas son 100% propiedad de empresarios privados nacionales.
- Realizan actividades comerciales generales.

■ La propiedad

- Tiene un valor de 8.973.373,3 pesos ARS, que es igual al precio de venta (38 veces el ingreso per cápita de Argentina).
- La propiedad está inscripta en el catastro; no existen disputas en cuanto a quién ostenta la titularidad y no está gravada con hipotecas.
- La compañía vendedora ha sido la única titular durante los últimos 10 años.
- La propiedad consta del terreno y un edificio de 2 pisos (almacén): la superficie es de 557,4 metros cuadrados, y el almacén tiene un área total de 929 metros cuadrados. Tiene 10 años, está en buen estado, y cumple con todos los requisitos del código de edificación de la ciudad.

■ La transacción

- La empresa vendedora ha aceptado la oferta de la empresa compradora.
- Las partes realizarán cada procedimiento que prevé la ley o que es necesario en la práctica para transferir la propiedad.

mediante el pago de tasas diferenciales, las cuales son un denominador común en casi la totalidad de las ciudades relevadas, donde se las denomina “tasa o trámite urgente”. Este recurso tiene un efecto doble: permite a los ciudadanos obtener resoluciones más veloces, y a las reparticiones asignar prioridades en sus procedimientos internos, con la contraprestación de una mayor recaudación. A pesar de que el acceso a un trámite diferencial incrementa el costo, este tipo de tasas no son las que generan mayor impacto en el resultado agregado.

Los costos más importantes se concentran en la confección de la escritura y en su inscripción en los diversos Registros de Propiedad Inmueble (RPI). Las variaciones se observan en los honorarios que perciben los escribanos, que en la mayoría de los casos estipulan un monto mínimo y un porcentaje que puede estar regulado o no; en los aportes notariales y en el monto fijado por los Estados provinciales en concepto de Impuesto de Sellos. Las tasas de inscripción son el ítem más diverso, en tanto, en algunos sitios se calculan como un porcentaje del monto de la operación, y en otros como importes fijos que corresponden a timbrados u otras obligaciones.

Análisis de los resultados

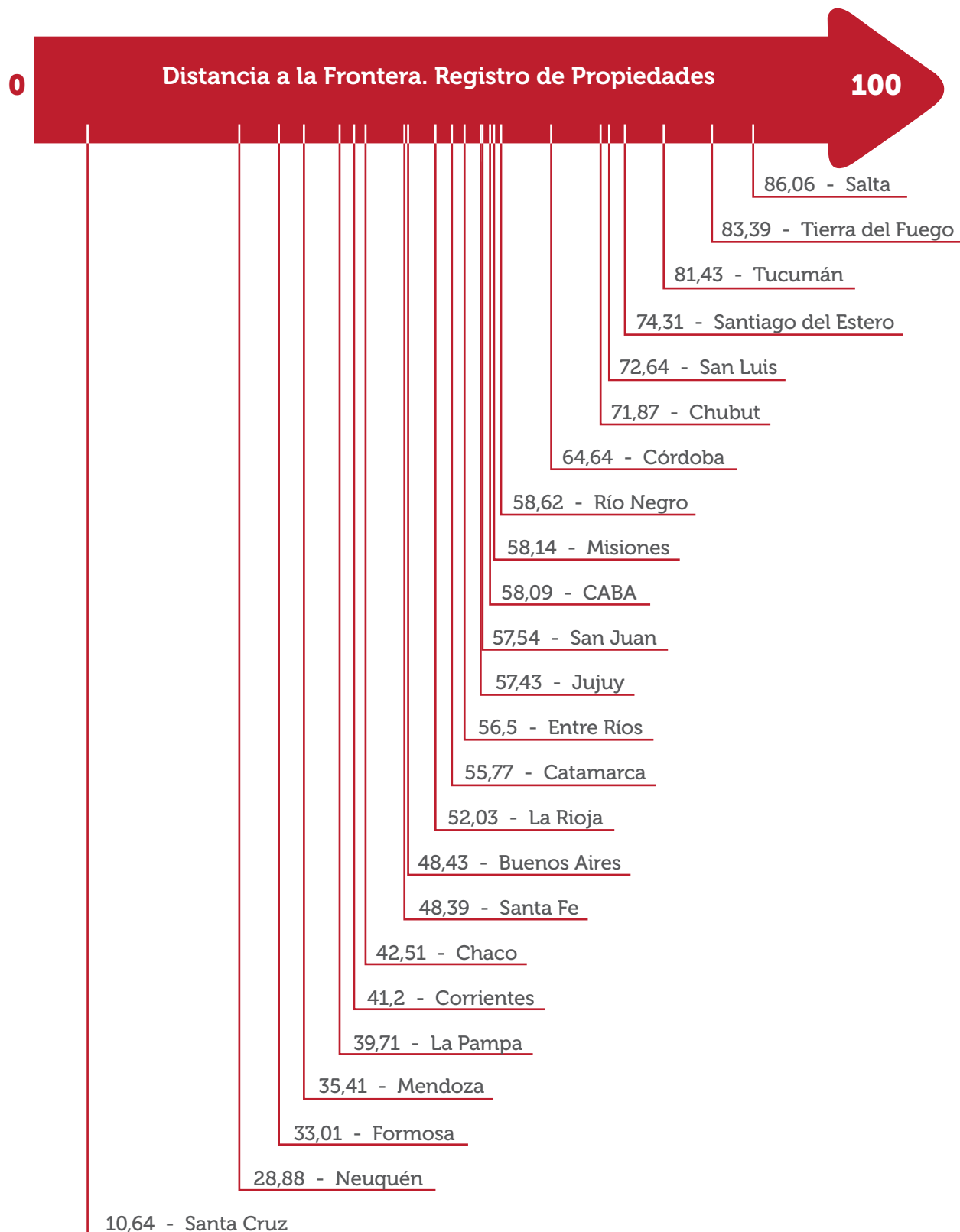
Tal como se describió al presentar este indicador, el resultado final y la posición de cada ciudad en el ranking surge del entrecruzamiento de los datos relevados para los componentes tiempo, costo y cantidad de procedimientos, los cuales tienen asignado igual impacto sobre la performance. El ranking Registro de Propiedades clasifica a las provincias desde la mejor performance (posición 1) a la peor (posición 24). Por su parte, la distancia a la frontera mide cuán cerca se encuentra una determinada provincia de obtener el mejor desempeño para ese indicador, siendo 100 el mejor puntaje, y 0 el más bajo.

Tabla 4. Indicador Registro de Propiedades

Indicador Registro de Propiedades						
Provincia	Ciudad	Ranking	Distancia a la Frontera	Procedimientos (número)	Tiempo (días calendario)	Costo (% del valor de la propiedad)
Salta	Salta	1	86,06	5	17,5	8,04
Tierra del Fuego	Río Grande	2	83,39	6	29,5	6,54
Tucumán	SM de Tucumán	3	81,43	6	51,5	6,32
Santiago del Estero	Santiago del Estero	4	74,31	6	110,5	6,02
San Luis	San Luis	5	72,64	6	105,5	6,37
Chubut	Comodoro Rivadavia	6	71,87	7	38,5	6,40
Córdoba	Córdoba	7	64,64	6	127,5	7,04
Río Negro	SC de Bariloche	8	58,62	8	57,5	6,27
Misiones	Posadas	9	58,14	7	70,5	7,66
CABA	CABA	10	58,09	7	51,5	8,10
San Juan	San Juan	11	57,54	6	145,5	7,66
Jujuy	SS de Jujuy	12	57,43	8	76,5	6,01
Entre Ríos	Paraná	13	56,5	7	42,5	8,53
Catamarca	SF del V de Catamarca	14	55,77	7	130,5	6,64
La Rioja	La Rioja	15	52,03	6	40	10,85
Buenos Aires	La Plata	16	48,43	7	77,5	8,91
Santa Fe	Rosario	17	48,39	8	68,5	7,51
Chaco	Resistencia	18	42,51	7	118,5	8,84
Corrientes	Corrientes	19	41,2	8	46,5	9,05
La Pampa	Santa Rosa	20	39,71	8	126,5	7,45
Mendoza	Mendoza	21	35,41	8	144,5	7,67
Formosa	Formosa	22	33,01	7	180,5	8,81
Neuquén	Neuquén	23	28,88	8	175,5	7,91
Santa Cruz	Río Gallegos	24	10,64	8	230,5	9,31

Fuente: base de datos de IPDE.

Nota: la clasificación se basa en la media de la distancia a la frontera de los subindicadores número de procedimientos, tiempo y costo asociados al registro de una propiedad. La distancia a la frontera está normalizada dentro de un rango de 0 a 100, 100 representando la frontera de las mejores prácticas. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.



La tabla de posiciones presenta en el podio a Salta (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego) y San Miguel de Tucumán (Tucumán). Salta se caracteriza por una combinación altamente competitiva de los componentes tiempo-costos-número de procedimientos. Se destaca principalmente por ser la ciudad que requiere la menor cantidad de procedimientos (5), gracias a la unificación de algunos de los trámites; como por ejemplo, la obtención del Certificado de Dominio y el de Inhibiciones, que se unifican en el Certificado de Ley. Los tiempos de gestión son rápidos sin necesidad de pago de tasas urgentes, salvo para el caso de la anotación de la escritura en el Registro de Propiedades, donde el pago de un plus de 3 mil pesos baja la cantidad de días de 18 a 2. Asimismo, la localidad cobra el doble que Tierra del Fuego en concepto de Impuesto de Sellos (2%), mientras que los honorarios de los escribanos son iguales (2%). El costo de registrar un inmueble es el más alto comparado con las otras dos que integran el podio (8,04% del valor de la propiedad).

Río Grande, por su parte, también muestra una buena correlación de factores, en tanto el registro de una propiedad se finaliza una vez cumplidos 6 pasos, que insuermen 29,5 días corridos y cuestan -en total- el 6,54% del valor de la propiedad. Si bien no cuenta con trámites que insuman menos de 1 día, y tiene sólo un paso que puede hacerse vía web, la localidad muestra un diferencial en su velocidad de gestión gracias a la posibilidad del pago de tasas urgentes. Nótese el importante ahorro de tiempo que esta particularidad provoca en la tramitación de un Certificado Catastral, donde el trámite común demora 60 días, y el urgente 3; o en la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad Inmueble, donde el común tarda 45 días, y el urgente sólo 5. En el caso de los costos, la provincia de Tierra del Fuego aplica -relativamente- un bajo porcentaje de Impuesto de Sellos (1%); mientras que los demás se mantienen dentro del promedio.

En el tercer puesto se anota San Miguel de Tucumán, cuyo diferencial es ser la ciudad (entre las primeras tres de la tabla) con el costo más bajo para hacer el registro de una propiedad. Hacer todos los pasos implica un 6,32% del valor de la propiedad, siendo Impuesto de Sellos el 2% y los honorarios notariales el 1%. Es el factor tiempo el que repercute negativamente en el desempeño de la localidad, en

tanto, en el procedimiento completo demora 51,5 días corridos; 34 días más que Salta, y 22 días más que Río Grande. A pesar de que en Tucumán algunos trámites pueden resolverse en línea, los tiempos no mejoran en comparación con las otras dos ciudades en donde los mismos se realizan de forma presencial.

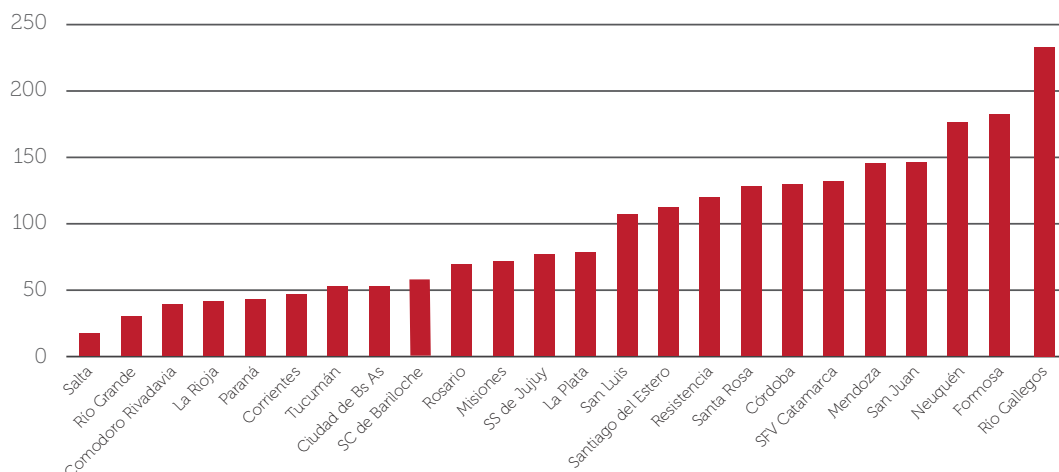
En el extremo opuesto del ranking se posicionan Formosa (Formosa), en el lugar 22, Neuquén (Neuquén), en el 23; y Río Gallegos (Santa Cruz), en el 24. Las tres ciudades combinan insatisfactoriamente las variables que releva este estudio, con más cantidad de procedimientos, altos costos y largos tiempos de resolución.

Formosa exige 7 trámites, que insumen 180,5 días corridos y equivalen al 8,81% del valor de la propiedad. Mientras que en Neuquén deben cumplirse 8 pasos, en 175,5 días, con un costo del 7,91% del valor del inmueble. Río Gallegos, por su parte, exige 8 procedimientos que demoran 230,5 días corridos (algo más de 7 meses), y representan el 9,31% del valor de la propiedad. Nótese la profunda diferencia que existe al compararla con Salta, la ciudad que encabeza el listado.

En el análisis global se observa que en el apartado de procedimientos, 7 de las 24 ciudades (el 29,2%) realiza una transferencia inmobiliaria en 6 pasos; 8 (el 33,3%) en 7 pasos ; 8 (el 33,3%) en 8 pasos; y sólo una (Salta), en 5 pasos.

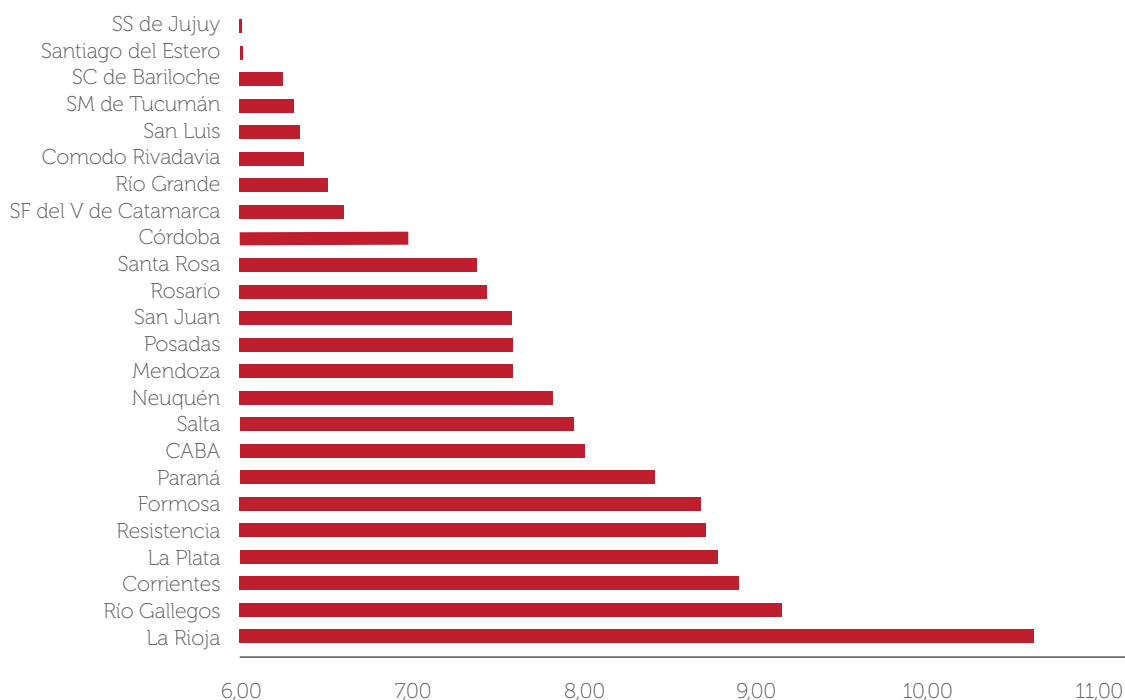
En relación a los tiempos, surge de los datos recolectados que existen 5 ciudades que insumen menos de 45 días en finalizar el trámite, siendo el promedio 33,6 días corridos. Hay 8 en las que se demora entre 45 y 90, promediando 62,5 días corridos; 10 entre 90 y 180,5, con un promedio de 136,5 días; y una (Río Gallegos) en la que se demora, como ya se apuntó, 230 días.

Tiempo (días calendarios)



En costos, existen 8 ciudades donde realizar una transferencia insume menos del 7% del valor de la propiedad, siendo el promedio 6,32%; otras 13 en las que cuesta entre 7 y 9%, con un promedio de 8,01%; y 3 en las que hace por más del 9%, cuyo promedio es de 9,73%.

Costo (% del valor de la propiedad)



Cómo funciona el registro de propiedades en Argentina

El proceso de registro de propiedades en la Argentina se realiza en el marco de regulaciones de carácter nacional, provincial y local; en el que intervienen notarios, dependencias de catastro y secretarías de hacienda de las ciudades. El Ministerio de Justicia supervisa a registradores y notarios, ambas figuras semipúblicas que a su vez se organizan en asociaciones profesionales independientes.

La inscripción pública de una escritura no es obligatoria, pero es un trámite usual. Los registros de la propiedad (regulados en todo el territorio nacional por la Ley 17801) distribuidos en el país tienen a cargo este aspecto, siendo su misión administrar el sistema de la publicidad jurídica inmobiliaria de cada distrito, con el fin de posibilitar a quienes tengan interés legítimo, el conocimiento de la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y los cambios que con respecto a ellos puedan producirse. Inscripto un documento ante estos organismos, el consecuente derecho real resulta oponible a terceros, contribuyendo a la certeza sobre la situación jurídica de los bienes, y por ende, dándole seguridad al tráfico inmobiliario.

Catastro, por su parte, funciona en la mayoría de los casos en el marco de las administraciones municipales, que a su vez se vinculan con las oficinas provinciales y comparten información con otros actores y empresas de servicios. Esta dependencia es de carácter registral, siendo su función principal identificar al bien registrable, identificación que se manifiesta a través de la relación entre el hecho y el derecho. Da cuenta de la ubicación del inmueble y de las características dimensionales que presenta, entre otros aspectos.

En Argentina, hacer la transferencia de una propiedad requiere una media de 6 procedimientos antes las dependencias mencionadas, 94 días corridos y un 7,66% del costo del inmueble.

Cambios recientes en el procedimiento

Uno de los pasos que componen este indicador sufrió una modificación comenzado el año 2018. Se trata del Impuesto a las Transferencias Inmobiliarias (ITI), que fue afectado por los cambios introducidos con la sanción de la Ley de Reforma del Sistema Tributario Argentino, que cambia las disposiciones legales para las propiedades transferidas desde el 1° de enero de 2018. No obstante, dejó vigentes las disposiciones previas para los inmuebles que fueron adquiridos antes de esa fecha.

El ITI es un impuesto que grava las transferencias de inmuebles ubicados en el país, y recae sobre las personas físicas y sucesiones indivisas que no realizan como actividad comercial habitual la compra-venta de inmuebles. Surge de aplicar el 1,5 % sobre el valor de transferencia de cada operación, el cual es retenido por el escribano interviniente al momento de la venta. En el caso en que la parte vendedora sea una sociedad, corresponde -independientemente de la afectación del inmueble a la hora de la venta- que se retenga el 3% en concepto de adelanto del Impuesto a las Ganancias.

La reforma de este impuesto implica un cambio en la tributación, en tanto, el anterior ITI -del 1,5 por ciento sobre el monto total- se reemplaza por un tributo puntual dentro de Ganancias, del 15 por ciento sobre la diferencia entre el valor de venta y el de compra o construcción. En ambos casos, las operaciones con la casa habitación están exentas.

Según apuntaron los informantes clave consultados en el relevamiento de este indicador, se espera que tales cambios provoquen repercusión en los agentes intervinientes, dado que afecta tanto a las personas físicas como a las empresas.

En lo que respecta a personas físicas no habitualistas, la nueva legislación plantea incentivos a sincerar los montos de las operatorias, dificultando las operaciones con sumas no declaradas. El pago del 15% de Ganancias sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta, provoca que quienes suman un bien inmueble

a su patrimonio cuiden de no informar un monto menor al real, puesto que falsear la cifra implica pagar más impuestos, por una diferencia mayor entre un extremo y otro de la transacción.

No obstante, esta modificación supone un problema para los usos y costumbres del mercado local, en tanto el impacto sobre las operatorias que usualmente se pactan en dólares puede derivar en el pago del impuesto por una ganancia que en la práctica no existe. A saber: si en la actualidad una persona adquiere una propiedad en US\$300.000 que con una cotización de \$20/US\$ representa \$6 millones y la vende en 2020 al mismo precio en moneda dura y un tipo de cambio de \$30, el inversor no habrá ganado en dólares pero igual deberá pagar el 15% que se revalorizó la propiedad en pesos.

Las empresas o sociedades, por su parte, continúan pagando Ganancias. El problema central aquí es que aquellas que hayan incorporado un inmueble a su patrimonio antes del 31 de diciembre de 2017 pueden actualizar su costo sólo hasta el año 1992, lo cual, genera un serio desfase. Imagínese el tamaño de la erogación que una sociedad debería realizar para el pago de este impuesto en el caso de que haya comprado un inmueble en dólares en la década del 90 (tiempo en que el peso equivalía a una dólar) y desea venderlo ahora, luego del fin de la convertibilidad.

Para paliar esta situación, las firmas pueden modificar el valor registrado tras una valuación especial por el índice de precios internos mayoristas (IPIM), que implica el pago de un impuesto del 8% sobre el mayor valor registrado impositivamente, y renunciar a cualquier proceso judicial o administrativo reclamando actualizaciones por inflación.

A este respecto debe recordarse que quienes ingresaron al Régimen de Exteriorización de Capitales impulsado por el gobierno nacional en 2016, pagaron un 5% al realizar la formalización de los inmuebles. El hecho de que ahora los contribuyentes que siempre tuvieron sus bienes ajustados a derecho tengan que pagar un 8% en concepto de revaluó, es leído por algunos actores del mercado como una situación de injusticia.

¿Qué reformar?

■ Realizar un diagnóstico de procesos para identificar las mejores prácticas de los registros más eficientes

El análisis de los datos arrojados por este indicador muestra marcadas diferencias entre una ciudad y otra en cuanto a las variables tiempos, costos y cantidad de trámites. La dinámica dispar que se observa se relaciona con un conjunto de factores tales como: regulaciones locales y provinciales, organización de las oficinas públicas intervinientes, integración entre diversas reparticiones que intervienen en el proceso, grado de informatización de la información, posibilidad de realización de trámites vía plataforma digital, entre otras. No obstante, los cuellos de botellas más notorios se observan en la inscripción del inmueble en los registros de la propiedad.

A este respecto, dado que tanto los colegios de escribanos como los registros de la propiedad cuentan con consejos federales que los agrupan, bien podría plantearse la realización de un diagnóstico que dé cuenta de cuáles son las sedes locales que mejor funcionan en el país, cuáles son las prácticas que las vuelven exitosas, y a partir de allí, estimular reformas en aquellas dependencias con peor rendimiento, con el objetivo de homogeneizar los procedimientos elevando el estándar.

■ Facilitar el acceso a la información y transparentar tiempos y costos

Entre los puntos negativos en el estudio de este indicador, se cuentan las dificultades para recabar información acerca de las particularidades del procedimiento en cada distrito y conocer fehacientemente los tiempos y costos que demanda a través de cada dependencia involucrada.

Si bien es el escribano quien ejerce la función pública delegada por el Estado para darle autenticidad a los actos jurídicos en la transferencia de una propie-

dad, es importante que quien requiere hacer un trámite de este tipo pueda conocer en detalles cuáles son los pasos estipulados por las regulaciones vigentes, como también los tiempos y costos que implican. Brindar información clara y accesible para los ciudadanos es una importante herramienta para la protección de sus derechos y la vigilancia sobre la transparencia y eficiencia de las oficinas públicas.

■ **Fomentar el uso de plataformas digitales**

Otra de las particularidades de este procedimiento es el escaso uso de las herramientas digitales tanto para el ciudadano como para la gestión particular de los escribanos que intervienen en una transferencia, lo cual, en un contexto de irrupción de la tecnología en diversos ámbitos, resulta anacrónico e ineficiente.

Siendo la tecnología un medio eficaz para abaratar costos, e internet un instrumento notable para democratizar el acceso a la información, es dable que las dependencias que intervienen en este asunto avancen en la mejora de su infraestructura digital.

Buen ejemplo de esto es la iniciativa entrerriana de comenzar un proceso de digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble, que luego buscará replicar a los 16 departamentos de la provincia. El trabajo es realizado conjuntamente por el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Secretaría de Modernización de Estado, Ciencia y Tecnología. El proyecto fue financiado en octubre de 2017 por el Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera (Profip). Esta primera etapa, que lleva un año de trabajo, tiene digitalizado ya 26.000 matrículas y 340 libros del Registro Propiedad Inmueble de Paraná.

■ **Evaluar la posibilidad de modificar el Impuesto a las Ganancias para empresas y sociedades**

Tal como se indicó en un apartado anterior, la Reforma Impositiva trajo cambios en la forma de tributación a la hora de transferir un inmueble. Si bien pueden observarse algunas mejoras en cuanto a los incentivos a transparentar las operaciones de las personas

físicas no habitualistas, las empresas y sociedades quedan en una situación delicada dada la onerosa carga que puede significar el Impuesto a las Ganancias para quienes incorporaron un inmueble a su patrimonio antes del 31 de diciembre de 2017 y sólo pueden actualizar su costo hasta el año 1992.



ASPECTOS FISCALES

La primera parte del presente capítulo analiza el tamaño del sector público para cada provincia argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, medido como el nivel de gasto con respecto a lo que produce cada jurisdicción (Producto Bruto Geográfico, PBG). Además, incluye el estudio del financiamiento de dicho gasto público, teniendo en cuenta qué porcentaje de los ingresos corrientes de una jurisdicción son recursos propios. Estas dos variables componen el indicador Aspectos Fiscales que forman parte del IPDE.

La segunda parte del capítulo realiza una breve descripción de la presión tributaria provincial, haciendo principal énfasis en el análisis de los recursos de las provincias y el Consenso Fiscal 2017.

A. Qué mide el Indicador

El indicador Aspectos Fiscales está compuesto por dos variables: tamaño del sector público y financiamiento del gasto corriente. La mejor performance de cada variable establece la frontera contra la que se compara al resto de las jurisdicciones en materia fiscal. El ranking de Aspectos Fiscales se calcula ordenando el puntaje obtenido de distancia a la frontera, redondeado a dos decimales. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.

Tamaño del Sector Público

La presencia del Estado en las economías subnacionales es analizada en este apartado a través de la relación que existe entre el nivel de gasto público corriente y el Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada economía del interior. Se entiende que la mayor injerencia del Estado en la actividad económica a través de más gasto público deriva en una menor libertad económica que obstaculiza el ambiente de negocios de cada jurisdicción argentina. Es por ello que un porcentaje bajo indica una mejor performance en esta variable.

Tabla 5.1. Tamaño del Sector Público

Provincia	PBG (en millones de \$)	Gastos Corrientes (en millones de \$)	Gastos corrientes /PBG (en%)
CABA	1.093.702	74.230	6,8
San Luis	65.548	6.872	10,5
Buenos Aires	1.838.504	238.765	13,0
Catamarca	95.053	12.991	13,7
Santa Fe	429.445	61.773	14,4
Córdoba	428.489	64.082	15,0
Chubut	112.008	16.824	15,0
Neuquén	174.388	27.339	15,7
Mendoza	225.860	38.156	16,9
Santa Cruz	103.500	20.371	19,7
La Pampa	47.134	9.990	21,2
Santiago del Estero	62.716	13.855	22,1
Tierra del Fuego	46.832	10.373	22,1
Salta	103.684	23.072	22,3
Río Negro	81.925	18.724	22,9
San Juan	53.136	13.897	26,2
Entre Ríos	115.165	30.290	26,3
Corrientes	65.819	17.459	26,5
Misiones	75.406	22.018	29,2
Tucumán	98.152	28.866	29,4
Jujuy	55.988	17.744	31,7
Chaco	77.147	26.311	34,1
La Rioja	25.489	9.993	39,2
Formosa	34.170	14.397	42,1
Promedio			22,3

El menor tamaño del sector público se registra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la relación entre erogaciones corrientes y PBG del 6,8%. Le sigue la provincia de San Luis (10,5%) y Buenos Aires (13%). En el otro extremo, Formosa es la provincia que presenta mayor injerencia estatal con un ratio del 42,1%. El promedio para todas las jurisdicciones argentinas es de 22,3%.

Financiamiento del Gasto Público

Este apartado indaga acerca de la forma de financiar el gasto público provincial a través de una proxy de autonomía fiscal: la recaudación tributaria en relación al total de ingresos corrientes de cada jurisdicción. Un mayor porcentaje indica mayor independencia de dicha jurisdicción respecto de los ingresos de origen nacional. Se entiende que una mayor autonomía incentiva el uso eficiente de los fondos públicos al permitir mayor control por parte de los contribuyentes. Además, el uso más eficiente de los recursos demanda menos recursos del sector privado y, por lo tanto, se espera eso derive en una mayor libertad económica para los individuos y una mejor performance de esa provincia.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera este ranking con un cociente del 85,5%, seguida por Buenos Aires con el 54,4%, Mendoza con el 34,4% y Córdoba con el 33,7%. En el otro extremo se encuentra Formosa, cuya recaudación tributaria es del 7,1% de sus recursos corrientes, mientras que otras provincias como Catamarca y La Rioja también presentan ratios inferiores al 10%. El promedio para las jurisdicciones argentinas es del 24,7%.

Tabla 5.2. Financiamiento del Gasto Público

Provincia	Ingresos Corrientes (millones de \$)	Recaudación Tributaria Provincial (en miles de \$)	Recaudación tributaria provincial/Ingresos Corrientes (en %)
CABA	80.930	69.184.418	85,5
Buenos Aires	218.264	118.777.655	54,4
Mendoza	36.076	12.396.690	34,4
Córdoba	68.242	23.004.827	33,7
Santa Fe	62.412	20.792.759	33,3
Neuquén	25.990	7.790.840	30,0
Chubut	17.364	4.792.600	27,6
Tierra del Fuego	9.397	2.534.177	27,0
Misiones	23.785	6.122.819	25,7
Tucumán	30.489	7.838.955	25,7
Entre Ríos	30.354	7.708.643	25,4
Santa Cruz	15.589	3.589.182	23,0
Río Negro	19.568	4.263.713	21,8
San Luis	12.457	2.694.340	21,6
La Pampa	12.059	2.302.784	19,1
Salta	23.378	4.360.750	18,7
Corrientes	20.128	2.766.250	13,7
Chaco	27.250	3.692.788	13,6
San Juan	19.602	2.610.053	13,3
Jujuy	17.376	1.873.397	10,8
Santiago del Estero	20.673	2.082.113	10,1
Catamarca	14.049	1.339.154	9,5
La Rioja	10.577	925.079	8,7
Formosa	17.537	1.252.621	7,1
Promedio			24,7

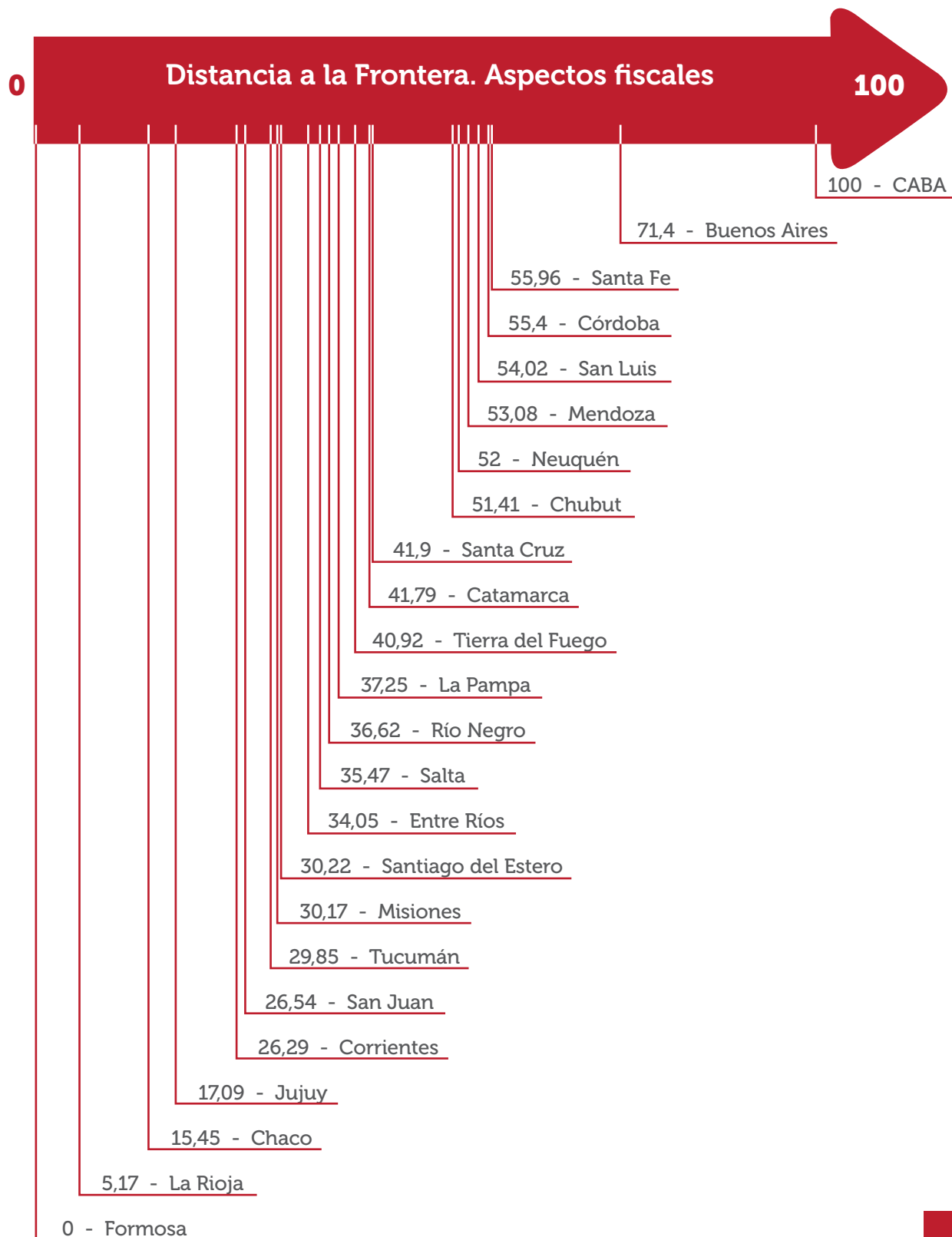
Análisis de los resultados

Tabla 5.3. Indicador Aspectos Fiscales

Provincia	Ranking	Indicador Aspectos Fiscales		
		Distancia a la Frontera	Recaudación tributaria provincial/Ingresos Corrientes (en %)	Recaudación tributaria provincial/Ingresos Corrientes (en %)
CABA	1	100,00	6,79	85,49
Buenos Aires	2	71,40	12,99	54,42
Santa Fe	3	55,96	14,38	33,32
Córdoba	4	55,40	14,96	33,71
San Luis	5	54,02	10,48	21,63
Mendoza	6	53,08	16,89	34,36
Neuquén	7	52,00	15,68	29,98
Chubut	8	51,41	15,02	27,60
Santa Cruz	9	41,90	19,68	23,02
Catamarca	10	41,79	13,67	9,53
Tierra del Fuego	11	40,92	22,15	26,97
La Pampa	12	37,25	21,19	19,10
Río Negro	13	36,62	22,86	21,79
Salta	14	35,47	22,25	18,65
Entre Ríos	15	34,05	26,30	25,40
Santiago del Estero	16	30,22	22,09	10,07
Misiones	17	30,17	29,20	25,74
Tucumán	18	29,85	29,41	25,71
San Juan	19	26,54	26,15	13,32
Corrientes	20	26,29	26,53	13,74
Jujuy	21	17,09	31,69	10,78
Chaco	22	15,45	34,11	13,55
La Rioja	23	5,17	39,21	8,75
Formosa	24	0,00	42,13	7,14

Fuente: base de datos de IPDE.

Nota: la clasificación se basa en la media de la distancia a la frontera de los subindicadores tamaño del sector público y financiamiento del gasto corriente. La distancia a la frontera está normalizada dentro de un rango de 0 a 100, 100 representando la frontera de las mejores prácticas. Los datos han sido actualizados al 31 de enero de 2018.



La mejor performance en materia fiscal corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguida por provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Chaco, La Rioja y Formosa son las provincias que presentan el peor desempeño en esta materia.

B. Presión Tributaria Provincial

La relación entre la recaudación tributaria provincial y el producto de la provincia es una medida proxy de la presión fiscal. Una mayor presión fiscal por parte del gobierno provincial limita la libertad económica a través de una mayor restricción en las decisiones de consumo, producción e inversión al tener que contemplar en cada una de ellas qué porcentaje se destina al fisco en concepto de tributos.

Cabe aclarar en este punto que las diferentes facultades tributarias de las provincias no sólo responden a su decisión voluntaria, sino que han sido oportunamente delegadas y repartidas por medio de la Constitución Nacional. De la misma forma, las transferencias intergubernamentales responden a un esquema sustentado por la Ley de Coparticipación Federal, cuya nueva formulación está pendiente, a pesar del mandato constitucional desde diciembre de 1996.

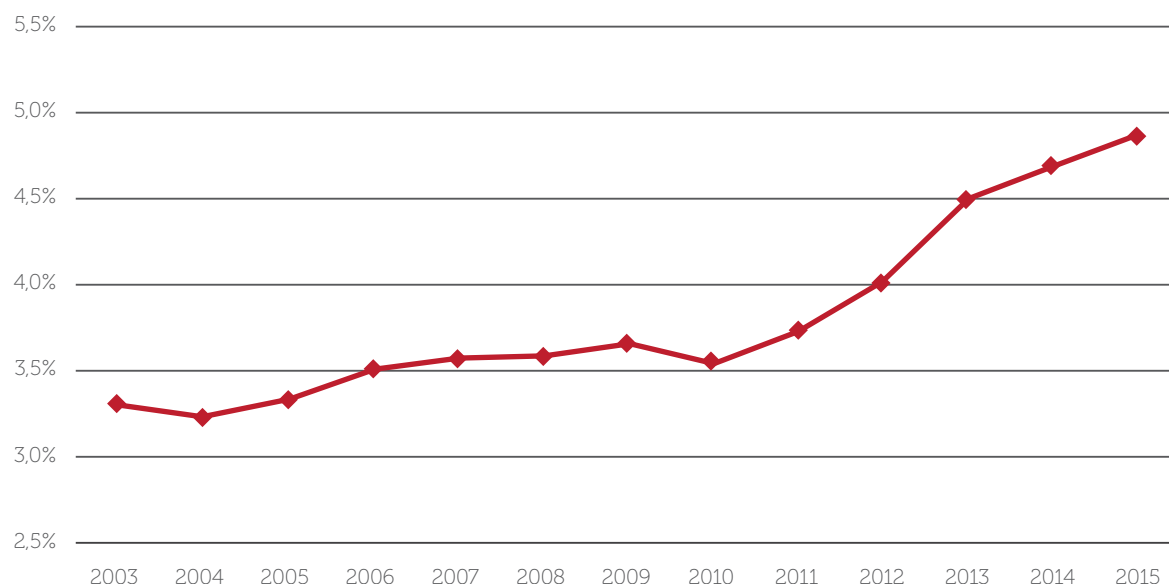
El cociente entre recaudación tributaria provincial y el Producto Bruto Geográfico (PBG) promedio para el conjunto provincial es del 4,9% para el año 2015, última información disponible sobre el nivel de actividad provincial para que hace posible estimar el PBG. Catamarca y Santiago del Estero son los distritos de menor presión impositiva mientras que Misiones y Tucumán son las que exhiben la mayor carga tributaria para el conjunto provincial.

Recaudación Tributaria Provincial/PBG - Año 2015

Provincia	Recaudación Tributaria Provincial / PBG
Catamarca	1,40%
Santiago del Estero	3,30%
Jujuy	3,30%
Santa Cruz	3,50%
La Rioja	3,60%
Formosa	3,70%
San Luis	4,10%
Corrientes	4,20%
Salta	4,20%
Chubut	4,30%
Neuquén	4,50%
Chaco	4,80%
Santa Fe	4,80%
La Pampa	4,90%
San Juan	4,90%
Río Negro	5,20%
Córdoba	5,40%
Tierra del Fuego	5,40%
Mendoza	5,50%
CABA	6,30%
Buenos Aires	6,50%
Entre Ríos	6,70%
Tucumán	8,00%
Misiones	8,10%
Promedio	4,90%

Un análisis de la evolución de este indicador en los últimos años muestra que la presión impositiva provincial observada para el ejercicio 2015 es la más alta de toda la serie. El siguiente gráfico lo ilustra.

Evolución Presión Fiscal Provincial Promedio - 2003 - 2015



La presión tributaria creció un 46,4% entre 2003 y 2015. La expansión observada para las provincias es heterogénea. La expansión máxima se advierte en Misiones con una suba del 112%, seguida por Formosa con el 96% y luego por Tucumán, Corrientes y Chubut con subas en torno al 77%. En el otro extremo, Catamarca es la jurisdicción que menos incrementó su presión fiscal, con una expansión del 9,5%. Santiago del Estero y Salta también se hallan en el grupo de provincias que menos subieron este indicador.

El mayor gasto de las provincias ha llevado a las mismas a introducir reformas tributarias en los últimos años casi sin excepción, con el correlato de una mayor carga impositiva sobre los agentes económicos. Hay una clara tendencia creciente en la materia que concuerda con lo que sucede a nivel país.

Variación Presión Tributaria por Provincia

Provincia	2003	2015	Variación
Misiones	3,80%	8,10%	112,00%
Formosa	1,90%	3,70%	96,60%
Tucumán	4,50%	8,00%	77,40%
Corrientes	2,40%	4,20%	77,20%
Chubut	2,40%	4,30%	77,00%
La Rioja	2,20%	3,60%	62,70%
Tierra del Fuego	3,40%	5,40%	60,20%
Córdoba	3,60%	5,40%	50,80%
Entre Ríos	4,50%	6,70%	48,50%
CABA	4,30%	6,30%	46,80%
Mendoza	3,70%	5,50%	46,60%
Chaco	3,30%	4,80%	46,50%
San Juan	3,50%	4,90%	41,00%
Neuquén	3,20%	4,50%	38,30%
Jujuy	2,40%	3,30%	37,90%
Buenos Aires	4,70%	6,50%	36,50%
Río Negro	4,00%	5,20%	31,30%
La Pampa	3,80%	4,90%	29,90%
Santa Fe	3,80%	4,80%	28,10%
San Luis	3,40%	4,10%	22,00%
Santa Cruz	2,90%	3,50%	20,30%
Salta	3,70%	4,20%	13,00%
Santiago del Estero	3,00%	3,30%	10,60%
Catamarca	1,30%	1,40%	9,50%
Promedio	3,30%	4,90%	46,40%

Los recursos de las provincias

Dentro del análisis de la presión fiscal, es necesario conocer cómo se financian las economías del interior y qué importancia tienen los tributos de nivel provincial en las arcas públicas.

De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, al cierre del ejercicio 2016, el conjunto de las 24 jurisdicciones percibió ingresos por un total de \$ 1.382,6 millones, observando un incremento que se explica principalmente por el comportamiento de los recursos tributarios, que aportan el 67,7% del incremento total y presentan una variación interanual positiva del 35,4%, tal como se exhibe en el siguiente cuadro.

Ingresos Totales de las Provincias - (Millones de pesos ARS)

Concepto	2016	2015	Variación Anual	Participación s/ Ingresos Totales
Ingresos Corrientes	1.323.206	947.639	39,60%	95,70%
Tributarios	988.276	730.063	35,40%	71,50%
Origen Provincial	425.136	314.640	35,10%	30,70%
Origen Nacional	563.139	415.423	35,60%	40,70%
Contribuciones SS	151.505	110.463	37,20%	11,00%
No Tributarios	66.058	46.390	42,40%	4,80%
Venta BS. y SS. Adm. Pública	7.116	7.137	-0,30%	0,50%
Rentas de la Propiedad	14.230	4.647	206,20%	1,00%
Transferencias Corrientes	96.021	48.938	96,20%	6,90%
Ingresos de Capital	59.360	53.612	10,70%	4,30%
Ingresos Totales	1.382.566	1.001.251	38,10%	100,00%

Los recursos de origen nacional registraron un crecimiento interanual del 35,6%, resultado del incremento del 40,7 % de la Coparticipación Federal de Impuestos – Ley 23.548. Es necesario destacar en este contexto que a fines de 2015, dando cumplimiento a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para San Luis y Santa Fe, y a la medida cautelar para Córdoba, cesó la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables destinados a ANSES para las tres Jurisdicciones. Asimismo, para las dos primeras provincias también quedaron sin efecto las deducciones dispuestas por el Decreto N° 1.399/01, destinadas al financiamiento de la AFIP.

Asimismo, la Ley N° 27.260 ratificó el Acuerdo suscripto entre el Estado Nacional y 21 Jurisdicciones que dispone la eliminación escalonada de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables destinados a la ANSES. La reducción de la detracción en 3 puntos porcentuales anuales es acumulativa a partir de 2016, hasta alcanzar el 0% en 2020. De este modo, las jurisdicciones obtuvieron una mayor participación en la distribución de recursos coparticipables.

Por otra parte, para el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Decreto 194/2016, se incrementó el índice de Coparticipación de 1,4% a 3,75%, para compensar el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad.

Los ingresos tributarios provinciales registraron un aumento del 35,1% y treparon a 425.136 millones de pesos. En el ejercicio 2016 se destaca la evolución del producido de los impuestos Inmobiliario, Sellos y Automotores, los cuales registraron crecimientos del 51,2%, 39,3% y 40,9% respectivamente. Por su parte, el Impuesto a los Ingresos Brutos creció un 33,8% interanual marcando la tendencia de la evolución total dado que representa el 75% de los tributarios provinciales.

En lo que refiere a los ingresos No Tributarios, tuvieron un crecimiento del 42,4 % explicado en mayor medida por el aumento del 51,2 % de los Otros No Tributarios. Este incremento es el resultado principalmente de la evolución de estos recursos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba (por la Ley 10.324 creó el Fondo para Obras de Infraestructura) y Neuquén. Por su parte,

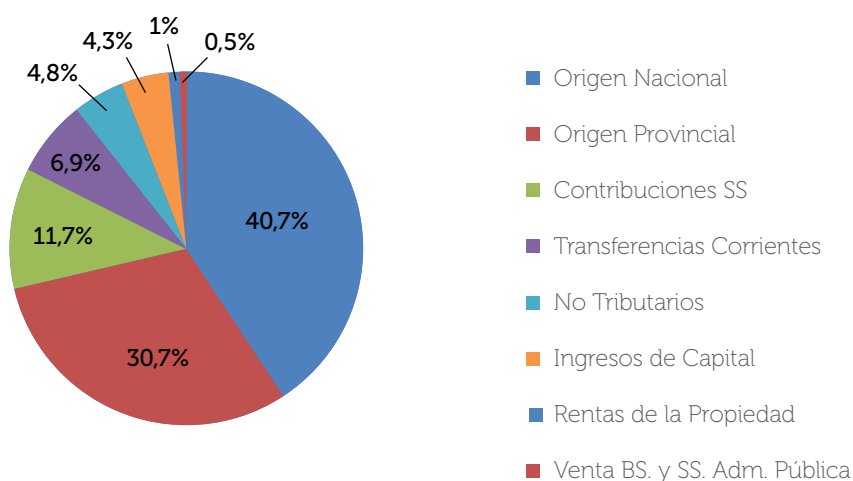
las Regalías Hidrocarburíferas crecieron un 31,8 %, explicado por diferentes factores como la variación del tipo de cambio en diciembre de 2015, el aumento en los precios del gas y, en menor medida, por un leve crecimiento en la producción de gas. Con respecto a los ingresos por Contribuciones de la Seguridad Social, se incrementan interanualmente un 37,2 % y aportan el 10,8 % de la variación total de los recursos. La evolución de estos recursos se encuentra relacionada con la política salarial de los empleados públicos provinciales, que será comentada en párrafos siguientes.

Los recursos por Transferencias Corrientes presentan una suba del 96,2 %, con incrementos significativos tanto de los Aportes del Tesoro Nacional, como de Aportes No Reintegrables para financiar erogaciones corrientes. Además, en 2016 se reanudan las transferencias correspondientes a la aplicación de la Cláusula 12 del Compromiso Federal de diciembre de 1999, en el marco del compromiso de armonización de sistemas previsionales provinciales contemplado en el Título V de la Ley 27.260. Por su parte, las transferencias en concepto de Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron un aumento del orden del 126%. Cabe destacar que en el ejercicio 2015 se registran los aportes del Tesoro Nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento por \$ 10.027 millones - operación que no se reiteró en 2016.

Los ingresos por Transferencias de Capital presentan un incremento de sólo 8,4 %. Cabe señalar que dichas transferencias son realizadas principalmente por el Gobierno Nacional, y se pueden distinguir las destinadas al Fondo Federal Solidario de las restantes. Las primeras crecieron un 30,4 % respecto al nivel registrado en 2015 principalmente por la variación del tipo de cambio y las modificaciones en las retenciones. Las restantes transferencias se redujeron principalmente por los menores niveles asignados a los programas de vivienda, al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y, en menor medida, por las reducciones en las transferencias a programas de Energía Eléctrica (no incluye FEDEI ni al Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas) y a los de Infraestructura Vial Productiva.

En efecto, a continuación se expone la participación de los principales recursos en el total de ingresos para el consolidado de 24 jurisdicciones en 2016, donde se destaca la preponderancia de los Ingresos Tributarios (de origen nacional 40,8% y provincial 30,7%).

Composición de los Ingresos Totales Provinciales - Año 2016



Impuestos Provinciales:

la importancia del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB)

Entre los impuestos que recaudan las provincias se destaca por su importancia cuantitativa el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Su participación ha aumentado de 56% de la recaudación propia en 1998 a 75% en 2016 de acuerdo a datos de un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)¹⁴. A su vez, del total de la presión impositiva nacional y provincial, que asciende a 31,3% del PBI, las provincias recaudan 5,2 puntos porcentuales. En promedio, la recaudación de las provincias se explica en un 75% por Ingresos Brutos, un 21% por impuestos a la propiedad y un 3% por otros tributos.

¹⁴ CIPPEC (2017). Reforma tributaria: análisis del proyecto del PEN y recomendaciones sobre Ingresos Brutos (196). Recuperado de <http://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/12/196-DPP-ADE-Reforma-tributaria-an%C3%A1lisis-del-proyecto-del-PEN-y-recomendaciones-sobre-Ingresos-Brutos-Walter-Agosto-diciembre-2017-VF.pdf>.

Estructura Tributaria Provincial - Año 2016

Impuesto	Participación sobre el total
Ingresos Brutos	75,00%
Sellos	8,90%
Inmobiliario	7,70%
Automotores	5,60%
Otros	2,80%
Total	100,00%

El impuesto a los ingresos brutos corresponde a las actividades autónomas, actos u operaciones y consiste en la aplicación de un porcentaje sobre la facturación de un negocio, independientemente de su ganancia. Cada provincia tiene sus propias alícuotas y parámetros individuales (actividad y niveles de facturación) para decidir cuándo una empresa debe pagar y cuándo no.

Este impuesto se caracteriza por ser indirecto, real, plurifásico y acumulativo, según señala el documento citado del CIPPEC. En cuanto a lo primero, se trata de un impuesto que grava el consumo como manifestación de capacidad contributiva, integra el precio del producto y se traslada a las siguientes etapas de la cadena de producción y comercialización. Al ser provincial, limita la facultad impositiva al principio de territorialidad. Con relación al hecho imponible, grava el ejercicio habitual y a título oneroso de las actividades desarrolladas en las jurisdicciones provinciales cualquiera sea el sujeto que la realice y su base imponible se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados por el ejercicio de la actividad gravada obtenidos en el ejercicio anual, pero sobre la cual se realizan anticipos mensuales.

Por otro lado, es un impuesto real, porque no tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente -nivel de ingresos, cargas de familia, etc.- y proporcional, porque establece valores proporcionales del impuesto en función del monto operado. En virtud de no considerar la capacidad contributiva del sujeto de hecho sino solamente su con-

sumo -la alícuota del impuesto es igual para distintos niveles de ingreso- se lo caracteriza como un impuesto regresivo.

Finalmente, una de sus características más difundidas es que se trata de un impuesto general a las ventas, plurifásico y acumulativo, que grava más de una vez la transferencia del bien o los insumos en las diferentes etapas del proceso productivo, y no permite deducir el impuesto pagado en la etapa anterior. Es plurifásico porque se aplica en todas las etapas de la actividad económica. Al funcionar como un impuesto en cascada sin compensación por créditos y ventas, provoca los efectos de piramidación y acumulación, que se agravan con el aumento del número de transacciones que afectan al mismo bien, insumo o servicio.

Cada provincia tiene dos formas de cobrar los Ingresos Brutos (IIBB): a las empresas que operan en esa misma provincia, o sea que realizan su actividad de manera local y a las compañías que solo venden en esa provincia, pero están radicadas en otra jurisdicción (convenio multilateral). Además, las tasas de IIBB varían de provincia en provincia: en cada jurisdicción rige un Código Fiscal y leyes impositivas que establecen las pautas para cada año. También, cada jurisdicción tiene sus reglas en cuanto a qué actividades están exentas. Lo más común es que sean algunas actividades industriales las que queden fuera del impuesto. También, suele suceder que las tasas son menores en las actividades primarias y se van incrementando para la industria, el comercio y la intermediación.

En efecto, la presión fiscal provincial queda explicada en gran medida por el impuesto a los ingresos brutos tal como se expone en el siguiente cuadro a continuación¹⁵, basado en un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA)¹⁶.

¹⁵ La diferencia en el cálculo de la presión tributaria expuesta en el primer punto y esta obedece al año de análisis y a la fuente de información.

¹⁶ Sociedad Rural Argentina (2017). Radiografía de la presión tributaria de las provincias. Recuperado de https://www.sra.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/Informes_tecnicos_Radiografia_presion_tributaria_provincias.pdf.

Presión Fiscal por Impuesto - Año 2016

Impuesto	% PBI
Ingresos Brutos	4,00%
Propiedad Inmobiliaria	0,40%
Automotores	0,30%
Sellos	0,50%
Otros	0,10%
TOTAL	5,30%

Si bien resulta complejo hacer la comparación interprovincial por las características propias de cada jurisdicción, hay algunos elementos que ilustran con claridad la heterogeneidad que existe entre las jurisdicciones en esta materia.

Por ejemplo, para el caso de Comercio y Servicios (Alícuota General), que supone la mayor cantidad de contribuyentes de este gravamen, la alícuota máxima en Santa Fe es de 4,5% (para aquellos que el año 2016 hayan facturado más de \$ 75 millones), en tanto que asciende a 5% en provincia de Buenos Aires y CABA. En el caso de Córdoba, es del 4%. En el otro extremo, para los contribuyentes de baja facturación, en Santa Fe la alícuota es de 2,76%, cuando en Buenos Aires es de 3,5%, en CABA 2,5% y en Córdoba 2,8%.

En el Sector Industrial, en la provincia de Santa Fe sólo tributan aquellos que tienen una facturación superior a los \$ 150 millones, mientras que en Buenos Aires lo hacen a partir de los \$ 52 millones y en CABA no hay mínimo de facturación para estar obligado al pago del tributo.

Respecto a la Producción Primaria en Santa Fe la misma no está gravada, cosa que sí sucede en Buenos Aires, CABA y Córdoba.

Pero la tasa del impuesto es una parte del problema porque el impacto en los costos argentinos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos proviene de una combinación entre la tasa, la falta de acuerdo en la forma de distribuir lo recaudado entre las jurisdicciones

y la deficiente legislación de los sistemas de retención y percepción. Así, el desorden de las provincias se traslada al sector privado como un costo.

Casi todas las provincias tienen regímenes tributarios que obligan a las empresas a recaudar para el fisco, incluyendo percepciones y retenciones. Otras, además, exigen un pago por cada camión que ingresa con mercaderías. Así, hay que sumar costos de administración de estos sistemas; también los costos financieros de poner a disposición de las provincias dinero que probablemente no se cobraron. Y, además, anticipar fondos que generan saldos a favor que pueden superar largamente el año de impuestos.

Así, cualquier reforma sobre este impuesto no sólo debe enfocarse en la tasa sino que también es importante la falta de reglas claras para la asignación de los ingresos entre las provincias, la inexistencia de un mecanismo de compensación automática entre ellas y la deficiente legislación que provoca saldos a favor permanentes que no son devueltos.

Consenso Fiscal 2017

Dada las distorsiones que presenta el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, existe consenso en la necesidad de reducir la carga de este tributo y reemplazarlo por otro de menor impacto en los agentes económicos, tales como un IVA provincial compartido o un impuesto a las ventas minoristas.

Si bien en diferentes oportunidades se intentó modificar y/o eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, ninguna de estas iniciativas prosperó en forma sostenida en el tiempo. La experiencia más reciente remite a los pactos federales de 1992 y 1993, que impulsaban la eximición del impuesto para las actividades primarias, manufactureras, financieras y de construcción. Sin embargo, su cumplimiento fue parcial, con el agravante que desde mediados de la presente década muchos de los logros se fueron revirtiendo.

Queda claro a partir de los números expuestos que uno de los principales facto-

res que ha condicionado la reforma es el hecho de que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos constituye la fuente principal de recursos propios en las jurisdicciones provinciales (75% de la recaudación provincial).

A fines de 2017 el gobierno nacional y los gobiernos provinciales suscribieron al acuerdo denominado Consenso Fiscal, donde las partes pusieron el acento en la reducción de la incidencia de este impuesto. Con este fin, las provincias asumieron determinadas obligaciones:

- Eliminar en forma inmediata tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien.
- Desgravar en forma inmediata los ingresos provenientes de actividades de exportación de bienes, excepto aquellas vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas.
- Desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.
- Establecer exenciones y un cronograma de reducción gradual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los sectores de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, industria manufacturera, electricidad, gas y transporte, quedarán exentos entre 2020 y 2022, mientras que en el resto de los sectores se proyectan reducciones de alícuotas.
- Adecuar los regímenes de retención, percepción y recaudación del gravamen, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones, según el Convenio Multilateral y evitar la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes.
- Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor en concepto de retenciones y percepciones acumulado en un plazo no mayor a seis meses.

El acuerdo alcanzado se limita a reducir la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la actividad económica. Concretamente, el impuesto a los ingresos brutos debe comenzar a reducirse en 2019 para terminar, en 2022, con un impuesto a la ventas con una alícuota del 5%. La rebaja gradual es de 0,5 a 1 punto del producto bruto por año. En contrapartida, el acuerdo alienta el aumento de la recaudación de los impuestos

patrimoniales provinciales (Inmobiliario y Automotor) tanto por la actualización de las valuaciones como por la reducción de los incumplimientos. Sobre el impuesto a los sellos los cambios son:

- Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente.
- No incrementar las alícuotas del Impuesto a los Sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.
- Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de Impuesto a los Sellos del 0,75% a partir del 1 de enero de 2019, 0,50 a partir del 1º de enero de 2020, 0,25% a partir del 1 de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1 de enero de 2022.

Por su parte, el acuerdo firmado establece que las provincias adoptarán para el cálculo y la determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los "procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidos" por la AFIP y fijarán alícuotas en un rango de entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecido.

Es de esperar que las provincias comiencen a reducir la carga impositiva cumpliendo con el consenso fiscal, para lo cual, a la vez inexorablemente deberán ordenar y reducir su gastos.

¿Qué reformar?

Las provincias argentinas son altamente dependientes de los recursos enviados por el gobierno nacional. Hay una muy baja autonomía fiscal en las economías del interior al representar, en promedio, los ingresos tributarios propios tan sólo el 24,7% del total de recursos corrientes. En otras palabras, en promedio, sólo una cuarta parte de los ingresos corrientes de las provincias provienen de recaudación propia.

La disparidad entre provincias es a la vez sustancial. La recaudación tributaria representa en Buenos Aires el 54,4% de sus ingresos corrientes, en Mendoza y Córdoba el 34,4% y 33,7% en forma respectiva mientras que en el otro extremo, se halla Formosa donde su recaudación tributaria apenas alcanza el 7,1% de sus recursos corrientes en tanto que en otros distritos como en Catamarca y La Rioja el ratio analizado es inferior al 10%.

A la vez, las provincias han incrementado su presión impositiva hasta llevarla a niveles récord, concentrándose la misma en un impuesto distorsivo como lo es Ingresos Brutos, desalentando la generación de empleo y atentando contra la productividad.

En efecto, este escenario requiere de varias reformas estructurales que deben comenzar, inevitablemente, con la reducción de los gastos excesivos en los distintos niveles de gobierno. Esto posibilitará reformar los esquemas tributarios, reducir la carga de los contribuyentes y con ello fomentar la inversión y el empleo privado. El gobierno nacional ha dado señales en este sentido pero estos cambios deben profundizarse y ampliarse. Es de esperar que las provincias comiencen a aplicar políticas públicas dirigidas a lograr un nivel de gasto público responsable, eficiente y transparente para que paralelamente pueda aliviarse la carga impositiva que hoy padecen los agentes económicos.





ANEXO

Distancia a la frontera y Ranking IPDE
por provincia

Tabla Anexo 1. Distancia a la Frontera y Ranking IPDE por provincia

Provincia	Ciudad	Distancia a la Frontera	Ranking
Buenos Aires	La Plata	51,11	12
Catamarca	SF del V de Catamarca	45,43	19
Chaco	Resistencia	54,18	8
Chubut	Comodoro Rivadavia	59,43	3
CABA	CABA	68,32	1
Córdoba	Córdoba	54,51	7
Corrientes	Corrientes	39,49	23
Entre Ríos	Paraná	54,61	6
Formosa	Formosa	40,11	22
Jujuy	SS de Jujuy	51,79	10
La Pampa	Santa Rosa	44,14	20
La Rioja	La Rioja	44,07	21
Mendoza	Mendoza	51,1	13
Misiones	Posadas	51,03	15
Neuquén	Neuquén	47,63	17
Río Negro	SC de Bariloche	45,83	18
Salta	Salta	57,18	4
San Juan	San Juan	49,49	16
San Luis	San Luis	63,73	2
Santa Cruz	Río Gallegos	36,84	24
Santa Fe	Rosario	51,93	9
Santiago del Estero	Santiago del Estero	51,09	14
Tierra del Fuego	Río Grande	56,15	5
Tucumán	SM de Tucumán	51,27	11

	Apertura de una Empresa		Obtención de Permisos de Edificación		Obtención de Electricidad		Registro de Propiedades		Aspectos Fiscales	
	Distancia a la Frontera	Ranking	Distancia a la Frontera	Ranking	Distancia a la Frontera	Ranking	Distancia a la Frontera	Ranking	Distancia a la Frontera	Ranking
	45,56	13	37,41	21	52,73	14	48,43	16	71,4	2
	36,58	23	59,96	10	33,06	24	55,77	14	41,79	10
	89,65	2	52,18	17	71,13	1	42,51	18	15,45	22
	51,06	7	61,74	9	61,07	6	71,87	6	51,41	8
	89,66	1	25,05	24	68,81	2	58,09	10	100	1
	51,63	6	51,05	19	49,85	16	64,64	7	55,4	4
	50,59	8	30,93	23	48,46	17	41,2	19	26,29	20
	68,19	3	64,38	7	49,91	15	56,5	13	34,05	15
	43,59	16	69,85	2	54,1	13	33,01	22	0	24
	43,56	17	73,76	1	67,11	3	57,43	12	17,09	21
	41,19	21	62,95	8	39,59	22	39,71	20	37,25	12
	37,54	22	66,97	5	58,63	10	52,03	15	5,17	23
	64,66	5	57,45	11	44,9	20	35,41	21	53,08	6
	46,92	12	55,77	13	64,13	5	58,14	9	30,17	17
	42,18	20	54,46	16	60,64	7	28,88	23	52	7
	42,21	19	57,39	12	34,29	23	58,62	8	36,62	13
	49,91	9	67,49	4	46,98	18	86,06	1	35,47	14
	42,24	18	66,1	6	55	12	57,54	11	26,54	19
	67,5	4	69,13	3	55,37	11	72,64	5	54,02	5
	32,51	24	54,98	15	44,18	21	10,64	24	41,9	9
	43,82	15	51,38	18	60,12	8	48,39	17	55,96	3
	49,72	10	55,24	14	45,96	19	74,31	4	30,22	16
	47,55	11	49,55	20	59,31	9	83,39	2	40,92	11
	45,13	14	33,77	22	66,17	4	81,43	3	29,85	18

Fundación Libertad es una entidad privada sin fines de lucro, con más de 30 años de vida institucional, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigida en particular a lo socio-económico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad en el contexto de las relaciones sociales. Creada en Rosario en 1988 por un grupo de empresarios, profesionales e intelectuales, la Fundación desarrolla su actividad con el apoyo de más de 350 empresas privadas. Sus proyectos incluyen cursos, conferencias, seminarios, investigaciones, estudios y publicaciones afines, ubicadas en las principales ciudades del país. Integra además, distintas redes de organizaciones a nivel mundial, como la FIL (Fundación Internacional para la Libertad).



RED FEDERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La Red Federal de Políticas Públicas es una reciente iniciativa de Fundación Libertad -apoyada por un gran número de organizaciones de más de diecisiete provincias- que promueve el trabajo sinérgico de entidades, ONG, think tanks y referentes de la sociedad civil, con el objeto de desarrollar y difundir políticas públicas que tiendan al crecimiento económico y el desarrollo social, desde una dimensión federal y productiva. La Red Federal de Políticas Públicas cuenta con más de veinte organizaciones adheridas y más de un centenar de referentes del sector privado y público forman parte de esta iniciativa.

Más información:

En Rosario: Sede Central
Mitre 170, Rosario (Santa Fe)
Tel. (0341) 410 5000
info@libertad.org.ar

En CABA:
Fundación Libertad, Oficina CABA
Av. Córdoba 637, 2do piso, oficina 202
sedecaba@libertad.org.ar